



**Asamblea General
Consejo de Seguridad**

Distr.
GENERAL

A/47/329

S/24289

15 de julio de 1992

ESPAÑOL

ORIGINAL: INGLÉS

ASAMBLIA GENERAL

Cuadragésimo séptimo período de sesiones

Tema 45 de la lista preliminar*

CUESTION DE CHIPRE

CONSEJO DE SEGURIDAD

Cuadragésimo séptimo año

Carta de fecha 8 de julio de 1992 dirigida al Secretario
General por el Representante Permanente de Turquía ante
las Naciones Unidas

En un anexo a su carta de 7 de mayo de 1992, el Encargado de Negocios interino de la Misión Permanente grecochipriota ante las Naciones Unidas hizo distribuir como documento de las Naciones Unidas (A/47/204-S/23887 y Corr.1) algunos extractos del informe de la Comisión Europea de Derechos Humanos, solicitud No. 8007/77, con arreglo a la decisión adoptada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 2 de abril de 1992.

Los extractos antes mencionados, seleccionados y distribuidos como documento de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad, no incluyen los memorandos presentados al Comité de Ministros por el Gobierno de Turquía, en los que queda reflejada su posición respecto de la solicitud No. 8007/77.

Con miras a proporcionar a los países miembros una imagen completa y equilibrada del caso examinado por la Comisión, el Gobierno de Turquía desea señalar a la atención de los países miembros el texto adjunto de sus memorandos presentados al Comité de Ministros del Consejo de Europa (véase el anexo).

Le agradecería que el texto de la presente carta y su anexo se distribuyeran como documento de la Asamblea General, en relación con el tema 45 de la lista preliminar, y del Consejo de Seguridad.

(Firmado) Mustafa AKŞIN
Embajador
Representante Permanente

* A/47/50.

Anexo

MEMORANDOS RELATIVOS A LA CUESTION DE LOS DERECHOS HUMANOS
EN CHIPRE PRESENTADOS AL COMITE DE MINISTROS DEL CONSEJO
DE EUROPA POR EL GOBIERNO DE TURQUIA

I. - INTRODUCCION

1. Resulta lamentable que el Comité de Ministros haya dedicado una vez más tiempo valioso al examen de una nueva solicitud del Gobierno grecochipriota, habiendo ya aprobado dos resoluciones en 1977 y 1979 sobre el tema y habiendo completado el examen de un caso idéntico.

Turquía se ha comprometido a respetar la Convención Europea de Derechos Humanos y no escatima esfuerzo alguno por ampliar la cooperación constructiva para el funcionamiento debido de los órganos correspondientes. Esta posición y actitud de Turquía ha quedado demostrada con motivo del arreglo amistoso de la cuestión que dio lugar a una denuncia interestatal presentada en 1982 contra Turquía por cinco gobiernos miembros del Consejo de Europa. No obstante, Turquía cree firmemente que no debe tolerarse que se abuse con fines políticos de la Convención Europea de Derechos Humanos ni de su mecanismo de control, así como tampoco de los órganos del Consejo de Europa.

Es un hecho muy conocido que el problema de Chipre surgió en 1963 cuando la parte grecochipriota primero abrogó unilateralmente la Constitución de 1960, en contravención de tratados internacionales, a fin de eliminar la base bicomunal de la República y tratar de poner en práctica el infame plan Akritas destinado a la eliminación física de la comunidad turcochipriota. En consecuencia, se impidió por la fuerza la participación igualitaria en el Estado de los turcochipriotas, a quienes se expulsó del Parlamento, el Gobierno, todas las instituciones gubernamentales e incluso sus hogares.

Pese a este hecho histórico, la postura de la parte grecochipriota es que la cuestión de Chipre se inició con la operación turca de paz de 1974. De acuerdo con ese criterio, siempre que pueden las autoridades grecochipriotas utilizar toda instancia internacional, o se aprovechan de ella, para centrar la atención en las consecuencias de los acontecimientos de 1974. Ello es parte integrante de la política grecochipriota de mantener una campaña constante de propaganda política y calumnias contra Turquía y la República Turca de Chipre Septentrional. Ninguna institución internacional, cualquiera que sea su esfera de interés, se libra de la aplicación de esa política. No cabe duda de que el intento de usar la Convención Europea de Derechos Humanos y su mecanismo de control con fines políticos no contribuye a que se encuentre una solución negociada al problema de Chipre.

En la búsqueda de una solución al problema de Chipre, es posible que las autoridades grecochipriotas hayan preferido deliberadamente la propaganda y no las negociaciones serias al rechazar recientemente los dos proyectos de acuerdo del Secretario General de las Naciones Unidas, del 17 de enero de 1985 y el 29 de marzo de 1986. Sin embargo, es el deber de los demás miembros de las instituciones internacionales no permitir que se recurra a sus organizaciones con fines tan nefastos.

Basándose en su posición y actitud, así como en su sincera convicción de que la utilización con fines políticos de los órganos del Consejo de Europa no beneficiaba en absoluto a nuestra organización, y habiendo hecho todo esfuerzo, aunque inútilmente, durante la etapa relacionada con la admisibilidad para demostrar a la Comisión los muy evidentes propósitos y las deficiencias jurídicas de la solicitud, Turquía decidió no tomar parte en los trabajos de la Comisión después de la etapa de la admisibilidad. El informe de la Comisión es inaceptable para Turquía porque no concuerda en letra ni en espíritu con la Convención Europea de Derechos Humanos y los principios fundamentales del derecho internacional.

Con las presentes observaciones y durante el debate sobre esta cuestión en el Comité de Ministros, Turquía desea una vez más presentar su postura respecto de los elementos jurídicos y fácticos contenidos en el informe de la Comisión y develar más claramente las motivaciones políticas del Gobierno grecochipriota, con el sincero deseo de que se ponga fin a los intentos por aprovecharse de la Convención y los órganos del Consejo de Europa.

II. OBSERVACIONES GENERALES

2. Al pedirse al Comité de Ministros que examine el informe de la Comisión Europea de Derechos Humanos (denominada de aquí en adelante: la Comisión) sobre la solicitud No. 8007/77, se le exige una vez más que se ocupe del resultado provisional de otro intento por el Gobierno grecochipriota de utilizar las disposiciones y el mecanismo de la Convención Europea de Derechos Humanos (denominada en lo sucesivo: la Convención) para la consecución de un objetivo político estratégico, vale decir, el control absoluto de la isla de Chipre por los grecochipriotas en abierta violación de compromisos internacionales vinculantes, los Acuerdos de Zurich y Londres, el Tratado de Garantía de 1960, el Tratado de Alianza de 1960 y la Constitución de la República de Chipre redactada de conformidad con los acuerdos mencionados.

3. El informe de la Comisión se refiere a la tercera solicitud presentada por el Gobierno grecochipriota tras los acontecimientos de 1974. La tercera solicitud es fundamentalmente idéntica a las partes pertinentes de las dos primeras solicitudes presentadas por el Gobierno grecochipriota (Nos. 6780/74 y 6950/75). Por consiguiente, la Comisión no debería haber declarado admisible la tercera solicitud. El Gobierno de Turquía se referirá nuevamente a esta cuestión en una etapa ulterior de las presentes observaciones.

4. Conviene señalar ahora que la Comisión recibió la tercera solicitud el 6 de septiembre de 1977, precisamente cuando el Comité de Ministros estaba examinando el informe de la Comisión sobre las dos primeras solicitudes y cuando resultaba evidente que el Comité de Ministros parecía dispuesto a adoptar una decisión desfavorable para el Gobierno grecochipriota. La presentación de la tercera solicitud se sincronizó de forma tal que se percibiera como un intento deliberado por influir en el resultado de las deliberaciones en curso del Comité de Ministros. Como se sabe, el Comité de Ministros hizo caso omiso de esas tácticas y, el 21 de octubre de 1977, adoptó

una decisión sobre las dos primeras solicitudes, confirmada posteriormente mediante la resolución DH(79)1, en que se pedía a las dos partes interesadas que reanudaran las observaciones bajo los auspicios del Secretario General de las Naciones Unidas para lograr un respeto permanente de los derechos humanos en Chipre mediante el establecimiento de la paz y la confianza entre las dos comunidades de la isla. Con ese proceder, el Comité de Ministros asignó la perspectiva política debida a las dos solicitudes.

5. Es deplorable que la Comisión haya declarado admisible la tercera solicitud que, al igual que las dos anteriores, es de índole estrictamente política. Cabe lamentar que la Comisión adoptase esa decisión el 10 de julio de 1978, es decir, fecha en que debía conocer la actitud adoptada por el Comité de Ministros en su decisión del 21 de octubre de 1977 de negarse a considerar que el intento anterior análogo del Gobierno grecochipriota al presentar las solicitudes primera y segunda con arreglo a la Convención se relacionara con una cuestión distinta del problema general de Chipre en toda su complejidad. Los Estados miembros del Consejo de Europa saben que actualmente la única forma de establecer la paz y la confianza mutua en la isla como medio para garantizar el respeto pleno de los derechos humanos a los miembros de las dos partes es mediante contactos entre ambas partes bajo los auspicios del Secretario General de las Naciones Unidas en el marco de la misión de buenos oficios que le ha sido encomendada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El Gobierno de Turquía confía en que el Comité de Ministros tome en consideración estos hechos al adoptar una decisión sobre el informe relativo a la tercera solicitud. Si el Comité de Ministros aplica un criterio diferente, no cabe duda de que afectará negativamente las gestiones de buenos oficios que interpone el Secretario General de las Naciones Unidas y, por consiguiente, pondrá en peligro las perspectivas de una solución duradera del problema de Chipre.

6. Al parecer, las tres solicitudes presentadas por el Gobierno grecochipriota contra Turquía tienen el mismo objetivo y propósito táctico, a saber:

- Influir negativamente en las gestiones del Secretario General de las Naciones Unidas;
- Mantener un mecanismo constante de referencia que dé la imagen de violaciones permanentes de los derechos humanos por Turquía en la isla de Chipre, con el propósito sobre todo de perjudicar las relaciones de Turquía con los países occidentales e impedir que Turquía ocupe el lugar que le corresponde en Europa occidental;
- Ser parte de una serie continua de solicitudes con arreglo a la Convención a fin de trasladar ulteriormente a otro foro las conversaciones entre las dos partes que se realizan bajo los auspicios del Secretario General de las Naciones Unidas, en el marco de la misión de buenos oficios que le ha sido confiada por el Consejo de Seguridad.

Sobre esto último, cabe señalar que, al actuar como lo hizo (véanse los párrafos 107 a 112 del presente informe) y rechazar la objeción relativa a la admisibilidad de la tercera solicitud so pretexto de que era fundamentalmente idéntica a las dos solicitudes anteriores, la Comisión prácticamente dirigió una invitación abierta al Gobierno grecochipriota a que presentara en el futuro nuevas solicitudes sobre cuestiones idénticas, aunque "adornadas" cada vez con el argumento adicional de una continuación de lo que la Comisión erróneamente consideró violación en sus informes primero y segundo.

7. Si quedara alguna duda sobre la índole política de las medidas adoptadas por el régimen grecochipriota, bastaría con recordar la forma en que calculó la fecha no sólo de la presentación de la tercera solicitud, como se señaló anteriormente, sino también de las gestiones iniciadas cuando el Comité de Ministros examinaba el informe sobre la tercera solicitud.

8. En la 374a. sesión de delegados de los Ministros, celebrada en junio de 1984, el informe de la Comisión figuró como tema del programa. En esa oportunidad, el delegado grecochipriota pidió que se examinase el informe cuanto antes en una reunión a nivel ministerial del Comité de Ministros. Para sustentar la necesidad urgente de que el Comité de Ministros examinara el informe a nivel ministerial, a diferencia de lo que suele ocurrir en relación con otros informes que recibe la Comisión, el Gobierno grecochipriota sostuvo que se trataba del primer caso desde el final de la segunda guerra mundial en que ocurrían violaciones organizadas y generalizadas constantes de los derechos humanos en Europa y se refirió al presunto grado de importancia de este caso como prueba de la eficacia de la Convención en su conjunto. No obstante, tres meses más tarde, a principios de octubre de 1984, la misma delegación grecochipriota, sin dar razón alguna, pidió que el Comité de Ministros aplazara el examen del informe de la Comisión. Tal "moderación" inusual del Gobierno grecochipriota en el Comité de Ministros se debió probablemente a la solicitud formulada por el Secretario General de las Naciones Unidas de que ambas partes se abstuvieran de adoptar medidas tendientes a obstaculizar las gestiones del Secretario General y también a que el Gobierno grecochipriota esperaba muy probablemente que el Secretario General de las Naciones Unidas formulara sugerencias favorables a la consecución del objetivo político ulterior de dominación completa de Chipre por el Gobierno grecochipriota. En la declaración formulada por el Gobierno grecochipriota en la reunión de delegados celebrada el 14 de febrero de 1986 hubo indicios en ese sentido. El delegado del Gobierno grecochipriota señaló en su declaración que, a juicio de su Gobierno, no había habido progreso alguno en las gestiones del Secretario General de las Naciones Unidas y que ello se debía a la posición intransigente de Turquía.

9. Esta última afirmación no concuerda con la realidad. Como se sabe, el 17 de enero de 1985 al reunirse en Nueva York con el Presidente Denktas de la parte turcochipriota y el Sr. Kyprianou, Presidente del Gobierno grecochipriota, el Secretario General de las Naciones Unidas formuló sugerencias sobre un proyecto de acuerdo que la parte turcochipriota aceptó sin reservas, mientras que el Sr. Kyprianou rechazó la sugerencia. Al resultado poco satisfactorio de la reunión del 17 de enero de 1985 siguieron diversos contactos y, el 29 de marzo de 1986, el Secretario General de las

Naciones Unidas presentó a las partes turcochipriota y grecochipriota un proyecto de acuerdo que incluía el marco para un futuro Estado federal, en el que se establecía un proceso de negociación para alcanzar un arreglo general. En su carta de fecha 29 de marzo de 1986, dirigida al Sr. Denktas y el Sr. Kyprianou, con la que presentaba el Proyecto de acuerdo básico, el Secretario General de las Naciones Unidas destacó que: "Este acuerdo básico es un paso indispensable de un proceso en marcha. Ambas partes han convenido en los asuntos que se negociarán después de que se acepte el acuerdo básico y cada una ha convenido también en proceder de buena fe ... La aceptación del Proyecto de acuerdo básico permitirá, por primera vez, que todas las cuestiones pendientes se aborden en forma sincera y decisiva como un conjunto integrado ... Espero que ambas partes puedan comunicarme pronto su aceptación del Proyecto de acuerdo básico ... Considero sumamente importante que aprovechemos ahora la oportunidad que se presenta de llegar a una solución justa y duradera del problema de Chipre".

Esta carta revela sin lugar a dudas que el Secretario General ofrecía a ambas partes una solución de conjunto que constituía "un todo integrante" en relación con el entendimiento claro que las dos partes habían alcanzado con él, y que el Secretario General esperaba una aceptación oficial incondicional del Proyecto de acuerdo básico que proponía. En las propuestas del Secretario General, la aceptación por ambas partes del Proyecto de acuerdo básico era una condición previa al examen y la solución ulterior de las cuestiones pendientes.

El Presidente Denktas, en nombre de la parte turcochipriota, dijo una vez más que estaba de acuerdo sin reservas con las propuestas y, en su carta del 27 de abril de 1986, señaló al Secretario General que estaba "... dispuesto a firmar el Proyecto de acuerdo básico tal como está ...", mientras que el Sr. Kyprianou, en nombre de la parte grecochipriota, no aceptó las propuestas del Secretario General 1/.

En el informe presentado por el Secretario General al Consejo de Seguridad el 11 de junio de 1986 (S/18102/Add.1), el rechazo del Proyecto de acuerdo básico por la parte grecochipriota quedó reflejado como sigue:

"Lamento que, dado que una de las partes no está aún en condiciones de aceptar el Proyecto de acuerdo básico de 29 de marzo de 1986, el camino todavía no está expedito para las negociaciones que he propuesto a fin de lograr un arreglo general."

A la luz de los hechos, sostener que el fracaso de las gestiones del Secretario General de las Naciones Unidas "se debe a la posición intransigente de Turquía" es tomarse una libertad asombrosa con la realidad comprobable.

1/ Las cartas dirigidas al Secretario General de las Naciones Unidas por el Sr. Denktas y el Sr. Kyprianou figuran como anexos II y III del presente documento.

10. En efecto, habiendo rechazado las propuestas formuladas por el Secretario General de las Naciones Unidas en enero de 1985, el Gobierno grecochipriota recurrió al informe de la Comisión sobre la tercera solicitud y, en febrero de 1986 (véase el tema 11 del documento CM/Del/Concl.(86) 393), pidió que el Comité de Ministros procediera a examinar el informe. Esta jugada del Gobierno grecochipriota, precisamente cuando el Secretario General de las Naciones Unidas realizaba nuevas gestiones y contactos tras el fracaso de su propuesta de enero de 1985 debido a la intransigencia grecochipriota, resultó un presagio del rechazo grecochipriota posterior de las propuestas del Secretario General del 29 de marzo de 1986.

El que la jugada grecochipriota se hiciera después de que se hubiese resuelto mediante un arreglo amistoso la denuncia interestatal presentada contra Turquía por cinco países miembros del Consejo de Europa también revela la motivación política del Gobierno grecochipriota.

11. En su decisión del 21 de octubre de 1977 y, nuevamente, en su resolución DH (79)1 sobre el informe relativo a las dos primeras solicitudes del régimen grecochipriota, el Comité de Ministros acertadamente consideró las cuestiones en juego en el contexto más amplio del problema de Chipre en general e insistió en que ambas partes continuaran sus conversaciones bajo los auspicios del Secretario General de las Naciones Unidas.

El memorando preparado por la República Turca de Chipre Septentrional, que figura como anexo I del presente documento, contiene una relación del problema de Chipre en general y presenta más concretamente un esbozo completo de la cuestión de los derechos humanos en Chipre desde el punto de vista turcochipriota y de la intransigencia del Gobierno grecochipriota respecto de la búsqueda de una solución pacífica al problema de Chipre.

12. Habiendo primero señalado a la atención del Comité de Ministros los objetivos políticos y consecuencias de la tercera solicitud, así como de las dos solicitudes anteriores del Gobierno grecochipriota, resulta evidente que tal medida política merece una respuesta política.

13. El Gobierno de Turquía estima que en sus resultados y conclusiones la Comisión no ha tomado en consideración todos los elementos pertinentes de la cuestión de los derechos humanos en Chipre y, por consiguiente, lamenta verse obligado a formular severas críticas contra la decisión de la Comisión sobre la admisibilidad y sobre la opinión expresada en su informe sobre el fondo del caso.

En los dos capítulos que siguen, el Gobierno de Turquía transmite al Comité de Ministros sus observaciones sobre las decisiones y opiniones de la Comisión que, en su mayoría, son erróneas desde el punto de vista jurídico y, por consiguiente, no tienen validez. Dado que la mayoría de las deficiencias se remontan a la decisión sobre admisibilidad del 10 de julio de 1978 y simplemente se repitieron en la opinión que figura en el informe del 4 de octubre de 1983, la mayor parte de los dos capítulos siguientes se dedica al examen de la decisión sobre admisibilidad.

III. OBSERVACIONES JURIDICAS SOBRE LA DECISION DE
10 DE JULIO DE 1978 RELATIVA A LA ADMISIBILIDAD
DE LA SOLICITUD 8007/77

14. En el apéndice II de este informe se reproduce la decisión sobre la admisibilidad adoptada el 10 de julio de 1978. De hecho, representa la mitad del informe.

La decisión es muy discutible, pues contiene varias afirmaciones que no resisten un análisis jurídico minucioso.

Por consiguiente, el Gobierno turco insta al Comité de Ministros a que examine las observaciones que siguen con sumo cuidado. Estas ponen en evidencia que el enfoque de la Comisión adolece de vicios graves de forma y de fondo. En consecuencia, el Gobierno de Turquía confía en que el Comité de Ministros se abstenga de hacer cualquier cosa que pueda interpretarse en el sentido de que hace suya la postura errónea adoptada por la Comisión respecto de las cuestiones de procedimiento y de fondo que se examinan más adelante.

15. El Gobierno de Turquía observa con pesar que en su decisión de 1978 la Comisión siguió muy de cerca el razonamiento y a menudo los términos empleados en su decisión de 1975 sobre las anteriores solicitudes (Nos. 6780/84 y 6950/75) del régimen grecchipriota. (Las observaciones y opiniones del Gobierno de Turquía con respecto al informe de la Comisión sobre esas solicitudes fueron transmitidas al Comité de Ministros en la memoria del Gobierno turco de 24 de mayo de 1977 - CM(77)117.) De resultas de ello, en muchos casos la Comisión no examinó, y al parecer, ni siquiera tuvo en cuenta las nuevas consideraciones jurídicas y los nuevos hechos que presentaron los representantes de Turquía. En consecuencia, la Comisión cometió un error de derecho, ya que se limitó a reformular sus conclusiones anteriores. Es más, el hecho de que la Comisión no haya examinado los distintos argumentos jurídicos que se le presentaron, deja la impresión de que trató la tercera solicitud con una actitud cerrada y de que llegó a sus conclusiones empleando métodos arbitrarios que equivalen a una denegación de justicia.

16. El Gobierno de Turquía supone que el Comité de Ministros preferirá que no se haga una recapitulación pormenorizada de los argumentos planteados por Turquía ante la Comisión. Al mismo tiempo, para que el Comité de Ministros pueda apreciar la medida en que la Comisión ha desestimado los argumentos presentados, cada uno de los cuales es suficiente para demostrar la inadmisibilidad de las actuaciones, es imprescindible examinar con algún detenimiento los argumentos presentados a la Comisión en nombre de Turquía. Con todo, el Gobierno turco procurará que estos comentarios sean tan sucintos como la complejidad del caso permita.

17. La Comisión examinó todos los argumentos presentados por el Gobierno de Turquía bajo cinco epígrafes (descritos en la decisión), a saber:

1. Locus standi del Gobierno recurrente;
2. Competencia ratione loci de la Comisión en relación con la jurisdicción de Turquía;

3. Agotamiento de los recursos internos y observancia de la norma de los seis meses;
4. La objeción de que la presente solicitud es idéntica a las solicitudes Nos. 6780/74 y 6950/75;
5. La cuestión de si la decisión del Comité de Ministros de 21 de octubre de 1977 impide a la Comisión examinar la presente solicitud (a la que debemos añadir una evaluación de la resolución DH (79)1).

18. El Gobierno de Turquía analizará la decisión, y por ende el fundamento de las conclusiones expuestas en el informe, en relación con cada uno de estos epígrafes, aunque sus comentarios sobre algunos serán más breves que los referentes a otros. Al respecto, el Gobierno de Turquía se permite subrayar que las condiciones de admisibilidad son acumulativas y que si no se cumple cualquiera de ellas, la solicitud debe en la práctica declararse inadmisibile.

I. En cuanto al locus standi del Gobierno recurrente

19. El primer punto que requiere comentario a este respecto es el rechazo por la Comisión del argumento del Gobierno de Turquía de que el Gobierno grecochipriota carece de locus standi en Chipre.

20. El Gobierno turco sostuvo ante la Comisión que el Gobierno grecochipriota no tenía derecho a presentar la solicitud en examen por dos motivos. En primer lugar, debido a que Turquía no había reconocido al régimen grecochipriota, no había en Chipre ninguna autoridad que pudiera entablar válidamente un procedimiento contra Turquía en nombre de Chipre. En segundo lugar, la forma inconstitucional en que el régimen grecochipriota había asumido el poder constituía una violación de las obligaciones contraídas con Turquía en virtud de un tratado, por lo que se hallaba efectivamente impedido de actuar en contra de Turquía conforme a derecho.

A. Efectos del no reconocimiento del régimen grecochipriota por Turquía

21. El Gobierno de Turquía reconoce al Estado de Chipre establecido en 1960 en virtud de tratados internacionales. En cambio, no reconoce al régimen grecochipriota que dice actuar en nombre de Chipre. Por consiguiente, en las actuaciones ante la Comisión el Gobierno de Turquía sostuvo que el régimen grecochipriota era incapaz de iniciar estas actuaciones válidamente. La Comisión rechazó ese argumento. El Gobierno de Turquía opina que la Comisión se equivocó al hacerlo e insiste en que la solicitud sigue siendo inadmisibile por ese motivo.

22. Dicha afirmación comprende los elementos siguientes:

- i) Como Estado soberano, Turquía decide si reconocer o no a los gobiernos de otros Estados;
- ii) Turquía no reconoce al Gobierno grecochipriota como Gobierno de Chipre. Aunque hay buenas razones de carácter jurídico y político para actuar así, no es necesario ahondar en ellas en esta ocasión;
- iii) El principio general de derecho internacional que confiere a los gobiernos el derecho a no reconocer a un régimen determinado, les confiere también el derecho a no mantener relaciones con él, así como el derecho a no ser colocados en situación de tener que entablar contacto directo de cualquier tipo con ese régimen. Este principio general se aplica asimismo a la Convención;
- iv) Por consiguiente, como el régimen grecochipriota no puede obligar al Gobierno de Turquía a mantener contacto directo con él, tampoco tiene derecho a iniciar un procedimiento contra Turquía en virtud de la Convención, cuyos procedimientos, sobre todo los previstos en el artículo 28, suponen una relación directa entre el Estado recurrente y el Estado recurrido;
- v) Lo anterior no quiere decir que las disposiciones de fondo de la Convención no estén en vigor entre el Estado de Chipre, establecido en virtud de tratados internacionales en 1960, y Turquía. Tampoco significa que el Gobierno grecochipriota no pueda entablar procedimientos contra otras partes en la Convención cuyos gobiernos estén dispuestos a reconocerlo como Gobierno de Chipre, ni que otras partes en la Convención no puedan entablar procedimientos contra Turquía, siempre que Turquía reconozca a sus gobiernos. Sólo significa que el régimen grecochipriota no esté facultado para entablar procedimientos en contra de Turquía;
- vi) Los Estados reconocen plenamente la posibilidad de que las relaciones establecidas entre Estados en virtud de tratados puedan ser suspendidas, aunque no anuladas, en tiempos de paz por decisión de una sola de las partes, lo que se refleja en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. El artículo 63 del Tratado, al disponer que la ruptura de relaciones diplomáticas entre las partes en un tratado no afecta las relaciones jurídicas establecidas entre ellas por el tratado, establece una excepción clara aplicable a los casos en que la existencia de relaciones diplomáticas o consulares es indispensable para la aplicación del tratado. Si, como es evidente, la aplicación de los tratados puede verse afectada de ese modo por un acto unilateral de ruptura de relaciones diplomáticas, nada impide sostener que el no reconocimiento de un gobierno - y por ende el no establecimiento de relaciones diplomáticas con él - puede tener el mismo efecto.

23. Estos argumentos del Gobierno de Turquía fueron expuestos en detalle en el contexto de los alegatos escritos y verbales durante la etapa de la decisión sobre la admisibilidad. Sin embargo, la Comisión los rechazó basándose en un razonamiento que el Gobierno de Turquía respetuosamente no puede aceptar. Por consiguiente, el Gobierno de Turquía presenta las observaciones siguientes sobre el contenido de la decisión de la Comisión.

24. En primer lugar, la Comisión cometió un error al concluir, después de hacer notar que Turquía no ponía en entredicho la existencia continua de Chipre como Estado y como Parte en la Convención, que: "Se desprende de ello que la solicitud no puede ser rechazada por el hecho de no haber sido presentada en nombre de Chipre en calidad de 'Alta Parte Contratante' en el sentido del artículo 24". (Véase el párrafo 5 del capítulo titulado "Fundamentos de Derecho", de la decisión sobre la admisibilidad.)

25. A juicio del Gobierno de Turquía, esa conclusión, teniendo en cuenta la declaración precedente de que Turquía no cuestiona la existencia continua de Chipre como Estado y como Parte en la Convención, es errónea. Desestima totalmente el hecho de que, por lo que a Turquía se refiere, en Chipre no hay ningún gobierno capaz de actuar en nombre de ese Estado en el plano internacional. La afirmación de que esta aseveración del Gobierno de Turquía reduce de alguna manera la protección sustantiva conferida por la Convención al pueblo de Chipre no le resta validez alguna. Las disposiciones sustantivas de la Convención se siguen aplicando. Sin embargo, a nivel de procedimiento, el régimen grecochipriota no puede presentar una solicitud de Estado a Estado en contra de Turquía. Las demás Partes en la Convención cuyos gobiernos Turquía reconoce, pueden presentar tales solicitudes; ese es el medio procesal de dar cumplimiento al interés colectivo de proteger los derechos sustantivos consagrados en la Convención.

26. En segundo lugar, la Comisión siguió un rumbo equivocado al sostener en el párrafo 7 del capítulo relativo a los "Fundamentos de Derecho" de la decisión de 1978, a propósito de la objeción de que "el Gobierno recurrente" no tiene derecho a representar a la República de Chipre, que "tiene el deber de seguir la práctica internacional, sobre todo la del Consejo de Europa, en lo que respecta a la situación de ese Gobierno". Según el Gobierno de Turquía, el deber de la Comisión es aplicar el derecho internacional y solamente el derecho internacional, que en este caso consiste evidentemente no sólo en la Convención Europea de Derechos Humanos, sino también en el derecho internacional consuetudinario, en cuyo contexto se ha de interpretar la Convención. La "práctica internacional" en cuanto tal no pasa a formar parte del derecho internacional instantáneamente y en forma automática y por ende no puede aplicarse directamente como un componente del derecho aplicado por la Comisión. Es efectivo que en ciertas circunstancias la "práctica internacional" puede transformarse en derecho o puede ser considerada como prueba de una interpretación admitida y por ende válida de un texto jurídico vinculante. No obstante, estas circunstancias siempre suponen que el Estado contra el que se aplica esa práctica ha dado su consentimiento o no ha opuesto objeciones. La noción de que una norma de derecho pueda instituirse pese a la objeción expresa de un Estado y pueda luego ser invocada en su contra, es totalmente contraria a los principios fundamentales del derecho

internacional. El Gobierno de Turquía siempre se ha opuesto a que se atribuya cualquier tipo de condición jurídica internacional al régimen grecochipriota. Si otros Estados quieren mantener relaciones con ese régimen, es asunto suyo. Pero lo que éstos hagan, si bien puede generalizarse hasta convertirse en "práctica", no puede obligar al Gobierno de Turquía.

27. Además, aunque esa supuesta "práctica" fuese pertinente en el presente contexto, cabe hacer notar que, muy en particular, ni siquiera todos los miembros del Consejo de Europa han reconocido el carácter representativo del Gobierno grecochipriota, ni antes ni después de la decisión relativa a la admisibilidad.

En dos ocasiones importantes, una de ellas relacionada con la vigencia de la Convención, los órganos del Consejo de Europa se han abstenido de reconocer que el Gobierno grecochipriota representa a la República de Chipre. En otra ocasión, el Comité de Ministros no opuso reparos a una decisión específica de Turquía de negarse a entablar relaciones con el Gobierno grecochipriota en virtud de un tratado, y ello a pesar de que la Secretaría lo había alentado a hacerlo.

El primer caso que cabe mencionar guarda relación con la decisión adoptada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa después de los acontecimientos registrados en Chipre a finales de 1963 de no aceptar una delegación parlamentaria de Chipre que representaba a la comunidad grecochipriota únicamente. El por qué de esta actitud quedó de manifiesto en el Informe de la Comisión de Verificación de Poderes de la Asamblea, de 23 de abril de 1964. La Comisión reconoció que:

"La cooperación entre las comunidades griega y chipriota prevista en el sistema constitucional de Chipre, así como los derechos y libertades fundamentales protegidos en el título II de la Constitución de Chipre han de considerarse como partes integrantes del imperio del derecho, cuya primacía ha sido reconocida por los Estados miembros del Consejo de Europa."

Esta cuestión fue explicada con todo detalle ante la Comisión en nombre de Turquía en la etapa de la admisibilidad. Sin embargo, la Comisión no hizo ningún intento por hacer frente a este importante problema o a sus consecuencias y con su silencio trató el argumento como si nunca se hubiera esgrimido, lo que representa un fallo significativo y grave de parte de la Comisión.

Es más, en enero de 1977, cuando se planteó la cuestión de invitar a "los portavoces y secretarios de los parlamentos de los Estados miembros del Consejo de Europa" a asistir a la ceremonia de inauguración del nuevo edificio del Consejo de Europa, la Mesa de la Asamblea Parlamentaria se opuso a que se cursara una invitación a la parte grecochipriota, ya que "(en Chipre) no hay un Parlamento que represente a toda la población". El Presidente de la Asamblea comunicó la decisión al Presidente de los delegados de los ministros en carta de fecha 10 de enero de 1977 (véase: CM/DEL/CONCL (77) 264-APPENDIX X-ITEM XXVII B)).

28. Más recientemente, al volver a enfrentarse a la cuestión de la representación de Chipre, la Asamblea llenó sólo uno de los tres asientos reservados habitualmente para el Estado Miembro "República de Chipre" y de hecho ese Estado Miembro fue admitido como representante de la comunidad grecochipriota, como destacó el Sr. Butty en su informe en nombre del Comité del Reglamento (Doc. 5108).

Cabe recordar que en el párrafo 28 del informe citado del Comité de la Asamblea figura el pasaje siguiente:

"Sin embargo, estoy convencido de que será posible superar estos obstáculos una vez que se consiga avanzar realmente en las negociaciones entre ambas comunidades. Por consiguiente y sin pretender examinar el problema de esas negociaciones a fondo - lo que quedaría fuera del mandato del Comité del Reglamento - expresamos la esperanza de que la iniciativa muy reciente del Secretario General de las Naciones Unidas del 8 de agosto de 1983 pueda allanar el camino para el logro de tales avances y de que las partes en la controversia aprovechen esta ocasión para resolver sin demora el problema de la delegación chipriota ante el Consejo de la Asamblea Parlamentaria de Europa. Lo anterior se podría lograr ya sea en el marco de las propias negociaciones entre las comunidades o, si ello es imposible, y en vista de que las negociaciones guardan relación con el problema en su conjunto, en forma paralela, estableciendo un procedimiento especial inspirado en los principios de la Constitución de 1960, que permitiría que se nombrara a una delegación completa y pluralista integrada por representantes de ambas comunidades. Por lo visto, este objetivo parece ser el único punto sobre el que hay acuerdo entre ambas partes en la actualidad; sin embargo, Chipre sólo estará representado en su totalidad en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa si se consigue alcanzarlo."

Independientemente de lo atinado que pueda haber sido el informe recién citado, habría sido de desear que la Comisión de Derechos Humanos actuara con el mismo rigor jurídico que la Asamblea. En tal caso, la Comisión habría llegado forzosamente a la conclusión de que la solicitud era inadmisibile.

Cabe observar además que en el período de sesiones de abril de 1986 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa se impugnaron las credenciales de los representantes grecochipriotas sobre la base de que "los representantes recién elegidos no pueden en ningún caso representar a toda la República de Chipre" y que la Asamblea ha decidido remitir el asunto a la Comisión Política y a la Comisión Jurídica a fin de que opinen al respecto, como propuso el Comité de Credenciales.

29. Hay otro aspecto de la práctica del Consejo de Europa que no está en armonía con la declaración tajante de la Comisión contenida en su decisión sobre la admisibilidad, según la cual la práctica del Consejo de Europa equivaldría a reconocer que el Gobierno grecochipriota es representativo de la totalidad de Chipre, a saber, el que guarda relación con la situación del miembro del Tribunal de Derechos Humanos y del miembro de la Comisión de Derechos Humanos que ocupan sendos puestos creados en uno y otro órgano en favor de Chipre. Como el Comité de Ministros bien sabe, existe un acuerdo en

virtud del cual esas personas, que fueron elegidas para ocupar sus altos cargos antes de 1963, continuarían en funciones inclusive después del término del período para el cual habían sido elegidos, ya que a juicio del Consejo de Europa actualmente no hay ninguna autoridad que actúe en nombre de la República de Chipre como Estado contratante de la Convención y que por ende tenga derecho a formular propuestas encaminadas a reconfirmarlas o a sustituirlas. La Comisión pasa totalmente por alto este importante punto cuando afirma que la práctica del Consejo de Europa apuntaría hacia un reconocimiento pleno del carácter representativo del Gobierno grecochipriota como Gobierno de la República de Chipre.

30. El tercer caso que demuestra que en su propia práctica el Comité de Ministros se ha abstenido cuidadosamente de obligar a Turquía a reconocer de algún modo al Gobierno grecochipriota como representante de la República de Chipre se registró en 1975 a raíz de las reservas hechas por Turquía a la hora de ratificar algunas convenciones del Consejo de Europa, en el sentido de que:

"Le Gouvernement de Turquie, tout en ratifiant (suit le titre du traité) déclare qu'il ne se considère pas engagé à exécuter les dispositions dudit Accord envers l'Administration Chypriote Grecque qui n'est pas habilitée constitutionnellement à représenter à elle seule la République de Chypre."

Por iniciativa de la Secretaría del Consejo de Europa, el Consejo de Ministros había consagrado prolongadas sesiones al examen de este asunto y en definitiva no se pronunció en contra de Turquía a causa de esta reserva, que ha seguido en vigor desde entonces. Al respecto, se hace referencia a las conclusiones de las reuniones 253a. y 254a. de los delegados de los ministros, así como a la notificación del Secretario General dirigida al Consejo de Europa (véase, por ejemplo, la carta No. JJ 172 C, de 3 de marzo de 1976). ¿Cómo es posible que a pesar de estos hechos bien conocidos la Comisión haya podido declarar en su decisión de 1978 que la práctica del Consejo de Europa confirma la condición del Gobierno grecochipriota como gobierno representativo de la República de Chipre?

31. La Comisión cometió asimismo un error al tratar de evitar las consecuencias de la falta de reconocimiento haciendo hincapié en el concepto de "cumplimiento colectivo" y declarando que las "obligaciones objetivas" de toda "parte contratante son obligaciones para con las personas sometidas a su jurisdicción y no respecto de otras Altas Partes Contratantes" (párrafos 10 y 11 de la sección titulada "Fundamentos de Derecho").

El Gobierno turco no necesita pronunciarse acerca de si esas proposiciones son o no correctas. Simplemente, no guardan ninguna relación con el tema que la Comisión tiene ante sí, que consiste en saber si los requisitos de procedimiento previstos en la Convención para dirimir reclamaciones entre Estados pueden aplicarse a una Parte sin colocarla en una situación en que se vería obligada a mantener algún tipo de relación con el recurrente, lo que es incompatible con el derecho del Estado recurrido de abstenerse de reconocerlo. El carácter de las obligaciones sustantivas establecidas por la Convención no tienen ninguna relación con la cuestión del procedimiento empleado para hacerlas cumplir.

B. Carácter inconstitucional de la acción del régimen grecochipriota

32. Aunque existe hasta cierto punto una superposición entre los argumentos relativos al no reconocimiento por parte de Turquía del régimen grecochipriota (tratados en la sección anterior) y el tema del carácter inconstitucional de la acción del régimen grecochipriota, es necesario examinar ulteriormente este último aspecto del asunto. Antes de iniciar ese examen es preciso recordar el carácter especial, más aún, prácticamente único, de la inconstitucionalidad del régimen grecochipriota. Este no es un caso de lo que podría llamarse inconstitucionalidad "simple", en que una autoridad sencillamente usurpa el poder en contravención de las leyes internas de un país. Este es un caso en que el desconocimiento de los requisitos constitucionales entraña también la violación de un tratado - un pacto internacional concluido solemnemente tras prolongadas negociaciones con el fin de garantizar la constitución en cuestión.

33. El Gobierno de Turquía sostuvo ante la Comisión que la iniciación de un procedimiento por parte del régimen grecochipriota era inconstitucional y no podía constituir una base válida para que la Comisión adoptara medidas en contra de Turquía. La Comisión rechazó ese argumento en su totalidad sobre la base del razonamiento aplicado en su decisión relativa a las anteriores solicitudes grecochipriotas. En particular, la Comisión invocó tres elementos de su decisión anterior:

- i) "No sólo debe tenerse en cuenta la letra de la Constitución";
- ii) Debe tenerse en cuenta "su aplicación en la práctica, especialmente a partir de 1963";
- iii) "Debe tenerse en cuenta el propósito del artículo 24 de la presente Convención ... en consecuencia, la protección de los derechos y las libertades de que goza el pueblo de Chipre en virtud de la Convención no debe resultar obstaculizada por ningún vicio constitucional de su Gobierno". (Todas las citas proceden de la Decisión sobre Admisibilidad, "Fundamentos de derecho", párr. 16.)

34. El Gobierno de Turquía sostiene que cada uno de esos fundamentos es incorrecto y que la Comisión cometió un grave error al repetir las palabras utilizadas en su decisión anterior, aparentemente sin haber pesado los nuevos argumentos que le fueron presentados ni respondido a ellos.

i) La letra de la Constitución

35. Cabe hacer notar que, en realidad, la Comisión no expresó opinión alguna acerca de la letra de la Constitución. Al parecer, asignaba tal importancia a la presunta aplicación de la Constitución en la práctica (sobre la cual se formularán comentarios más adelante) que permitió que la práctica anulara totalmente a la letra. Este criterio implica que la Comisión

reconocía que la iniciación de un proceso era incompatible con la Constitución. Por lo demás, la Comisión así lo dijo en la frase que precedía a su referencia al papel que desempeñaba la práctica:

"Incluso suponiendo que una incompatibilidad con la Constitución de Chipre ... pudiese influir en la validez de las solicitudes ..."

Por consiguiente, no es necesario que el Gobierno turco recuerde en detalle al Comité de Ministros el desconocimiento fundamental de la Constitución de 1960 que representan los acontecimientos de 1963 y posteriores a esa fecha, la exclusión de los turcochipriotas del Gobierno de Chipre y la asunción del poder total por parte de una sola comunidad, la comunidad grecochipriota. Este aspecto del problema que nos ocupa ya había sido enunciado en detalle por Turquía en su memorando al Comité de Ministros sobre las solicitudes grecochipriotas primera y segunda (Documento CM (77) 117). Desde entonces se han cometido nuevas violaciones, en relación con la disolución de la Cámara de Representantes grecochipriota y con los comicios celebrados por los grecochipriotas para elegir una nueva cámara de representantes grecochipriota. La reducción de la edad para votar a 18 años el 16 de enero de 1986 es otro ejemplo más de tales violaciones.

36. No hay ninguna disposición en la Constitución de Chipre que permita una violación tan fundamental de sus términos o que pueda darle validez con arreglo al derecho constitucional chipriota. Tampoco ha invocado el Gobierno grecochipriota ninguna norma de interpretación constitucional establecida como parte del derecho consuetudinario o no escrito de Chipre que pueda autorizar tal violación, ni una interpretación que le dé efecto legal; no puede haber duda alguna de que tal norma no existe.

Por el contrario, en el párrafo 1 del artículo 182 de esa Constitución se estipula que ciertos artículos de la Constitución son artículos básicos, que "no pueden enmendarse en modo alguno, ya sea mediante modificación, adición o revocación". Puede decirse entonces que esos "artículos básicos" que están establecidos en el anexo III de la Constitución y que han sido sacados del Acuerdo de Zurich de 11 de febrero de 1959, han tenido la validez y la fuerza de normas contractuales de derecho internacional, pues entrañan no sólo la voluntad del Parlamento bicomunal, sino también la voluntad soberana de Turquía, Grecia y el Reino Unido. Sin embargo los grecochipriotas han violado constantemente la Constitución que precisamente sostiene que sigue estando en vigor, violaciones que incluyen a los "artículos básicos" de dicha Constitución.

Además, el párrafo 3 del artículo 182 establece que la Constitución sólo puede enmendarse mediante una ley aprobada por mayoría de dos tercios a lo menos del número total de representantes pertenecientes a la comunidad turca. Esta condición nunca se ha cumplido en Chipre después de la salida forzada de los turcochipriotas de todas las instituciones del Gobierno en diciembre de 1963. La situación se mantiene en la actualidad, aunque los grecochipriotas siguen pretendiendo que la Constitución de 1960 aún está en vigor.

37. En consecuencia, si (al contrario de lo que opina el Gobierno de Turquía) se encontrara algún fundamento para considerar que un acto que es inconstitucional con arreglo a la Constitución escrita establecida de Chipre es capaz de crear efectos legales válidos respecto de Turquía, tal fundamento se debe hallar no sólo en el derecho internacional general, sino en el derecho internacional aplicable concretamente a las relaciones entre el régimen grecochipriota y Turquía o, en otras palabras, en el derecho internacional que es oponible a Turquía por parte del Gobierno grecochipriota.

38. La Comisión no trató expresamente este aspecto del asunto, pero cabe suponer que lo tenía presente cuando se refirió a la aplicación de la Constitución en la práctica, y a ciertos actos e instrumentos jurídicos internacionales. Por consiguiente, es ese aspecto de la cuestión que el Gobierno de Turquía debe señalar a la atención del Comité de Ministros.

ii) Inaplicabilidad del argumento sobre "la aplicación práctica de la Constitución de 1960" y especialmente de ciertos actos jurídicos internacionales elaborados en el curso de esa práctica

39. La Comisión repitió palabra por palabra los términos utilizados en su decisión de 1975. Declaró que "debe tenerse en cuenta no sólo la letra de la Constitución [de 1960] sino también su aplicación en la práctica, especialmente a partir de 1963"; y luego observó que varios actos e instrumentos jurídicos internacionales elaborados en el curso de esa aplicación práctica y presentados en nombre de la República de Chipre "han sido reconocidos en las relaciones diplomáticas y de los tratados, tanto por los gobiernos de otros Estados como por los órganos de las organizaciones internacionales, incluso el Consejo de Europa".

40. El Gobierno de Turquía no puede sino observar que este razonamiento no tiene en cuenta la consideración básica de que lo que importa en una solicitud presentada en nombre de Chipre contra Turquía dentro del marco de la Convención no es la relación entre Chipre y terceros Estados u organizaciones internacionales, sino entre Chipre y Turquía.

41. En lo que respecta a Chipre y Turquía, la situación legal se rige necesariamente por el Tratado de Garantía de 1960, que está vigente entre los dos países. El artículo I de ese Tratado garantiza en forma expresa, inequívoca e irrevocable el respeto de la Constitución de Chipre, lo que incluye los artículos básicos de la misma, aprobados como parte del arreglo de 1960. Cualquiera que sea la actitud que los Estados decidan adoptar, individual o colectivamente, respecto del desconocimiento por la comunidad grecochipriota de los términos del arreglo de 1960, esos otros Estados no pueden, mediante una acción individual o colectiva, alterar el contenido de la obligación legal que tiene Chipre para con Turquía. El contenido de esa obligación es claro y consiste en actuar únicamente de conformidad con la Constitución de 1960. La conducta que no se ajuste a dicha Constitución no puede "oponerse" legítimamente a Turquía. El punto es simple y amplio. Su base jurídica está bien establecida en la práctica de los tribunales internacionales.

42. El concepto de "inoponibilidad" es un concepto que la Corte Internacional de Justicia y otros tribunales internacionales utilizan a los efectos de determinar la posición jurídica de cada parte en una controversia frente a la otra, sin remitirse al ordenamiento jurídico en general ni a las relaciones de las partes con otros Estados que no son partes en esa controversia determinada. En consecuencia, el concepto pertenece a la misma categoría de conceptos como "preclusión" e "impedimento", cuya aplicabilidad también se basa en los hechos concretos de la relación de una parte con la otra.

43. Un ejemplo del uso del concepto se encuentra en el caso Norwegian Fisheries (International Court of Justice, Reports 1951, pág. 116). En esa oportunidad la Corte dijo que la norma de las diez millas para delimitar la longitud de la línea de cierre de las bahías era "inaplicable contra Noruega por cuanto ésta siempre se ha opuesto a cualquier intento de aplicarla a la costa noruega". La palabra "inapplicable" del texto inglés aparece en el texto francés (que es el texto que hace fe) como "inopposable" (véase pág. 131).

44. Más adelante en el mismo fallo, al referirse al sistema noruego de utilizar líneas de base rectas para la delimitación del mar territorial, la Corte dijo que - y tal vez sea mejor citar el texto en francés, que hace fe:

"La notoriété des faits, la tolérance générale de la communauté internationale, la position de la Grande-Bretagne dans la mer du Nord, son intérêt propre dans la question, son abstention prolongée, permettraient en tout cas à la Norvège d'opposer son système au Royaume-Uni (p. 139)."

45. El concepto vuelve a aparecer en el juicio arbitral entre Gran Bretaña y Francia relativo a la delimitación de la plataforma continental en la zona del Canal. En un momento dado, el Tribunal Arbitral estaba examinando el efecto del rechazo por el Reino Unido de ciertas reservas de Francia a la Convención de Ginebra de 1958 sobre la plataforma continental. Al respecto, el Tribunal concluyó lo siguiente:

"... en opinión del Tribunal Arbitral, se puede decir con propiedad que el efecto del rechazo es hacer las reservas inoponibles al Reino Unido. (Laudo de 30 de junio de 1977, párr. 61, International Law Reports, vol. 54, párr. 6, pág. 52)."

46. Pero la aplicación del concepto que más se aproxima a la presente situación se encuentra en el fallo de la Corte Internacional de Justicia en el caso sobre Fisheries Jurisdiction entre Gran Bretaña e Islandia (ICJ Reports 1974, pág. 3). En esa parte precisa del fallo la Corte se encontraba considerando los efectos de ciertas normas pesqueras de Islandia introducidas en 1972 sobre los derechos de Gran Bretaña. La Corte observó que la acción unilateral de Islandia constituía una contravención del artículo 2 de la Convención de Ginebra de 1958 sobre la alta mar y que además pasaba por alto

los derechos de Gran Bretaña resultantes de un intercambio de notas de 1961. La Corte dijo (pág. 29):

"En consecuencia, la Corte no puede sino concluir que el reglamento de Islandia de 14 de julio de 1972 por el que se establece una zona de jurisdicción exclusiva en materia de pesca que se extiende a 50 millas náuticas desde las líneas de base trazadas alrededor de la costa de Islandia, no es oponible al Reino Unido, y que este último no tiene obligación alguna de aceptar que Islandia ponga término unilateralmente a los derechos de pesca del Reino Unido en la zona."

47. Esas observaciones son aplicables directamente al presente caso. Razonando en la misma forma y siguiendo lo más de cerca posible las palabras de la Corte Internacional de Justicia, no se puede sino llegar a la conclusión de que las medidas grecochipriotas adoptadas con posterioridad a 1963 no son oponibles a Turquía. Esta última no tiene obligación alguna de aceptar que Chipre ponga término unilateralmente a los derechos de que goza Turquía con arreglo a los tratados de 1960 y no se puede invocar contra Turquía ninguna posición constitucional incompatible con esos derechos.

48. Si el Gobierno de Turquía parece insistir en este punto, es porque a pesar del hecho de que lo ha señalado repetidas veces a la Comisión 2/, ésta no lo ha considerado concretamente ni en las solicitudes anteriores ni en la solicitud actual.

49. El punto tiene gran importancia y basta por sí sólo para que la solicitud se inadmisibile. El hecho de que la Comisión no lo haya examinado es un defecto tan fundamental del razonamiento de la Comisión que puede viciar totalmente la conclusión a que ésta ha llegado.

iii) Procedimiento correcto para invocar el artículo 24 de la Convención

50. La Comisión ha repetido sin variaciones la referencia que hizo en su decisión de 1975 a la relación entre la protección de los derechos y libertades del pueblo de Chipre y la poca importancia que, según se ha sugerido, tienen los vicios constitucionales de su Gobierno. Al hacerlo, la Comisión una vez más ha concebido mal la situación y ha llegado a una conclusión errónea de derecho.

2/ El punto fue planteado por el representante de Turquía en las audiencias de 1975. Dijo en esa ocasión (págs. 11 y 12 del Acta Literal) que el Gobierno de Turquía "est fermément convaincu que la qualité de requérant dans le sens del' Article 24 de la Convention fait défaut á l'Administration chypriote-grecque et que sa prétendue capacité de représenter l'Etat de Chypre lui est en tout état de cause inopposable". La brevedad con que el representante se refirió al concepto se debió a que suponía que sería tan evidente para la Comisión como lo era para el Gobierno de Turquía que las cuestiones planteadas en la solicitud grecochipriota no se podían resolver sin remitirse al carácter específico de la relación que existía entre esos países, Chipre y Turquía, y no entre el Gobierno grecochipriota y otros Estados que no participaban directamente en la situación.

II. La carencia de competencia de la Comisión *ratione loci*

51. La siguiente crítica principal que el Gobierno turco debe hacer a la posición adoptada por la Comisión se refiere a la cuestión de su competencia *ratione loci*. El Gobierno de Turquía ha negado firmemente la admisibilidad de la presente solicitud por la razón de que no se ha cumplido el requisito del artículo 1 de la Convención de que la persona protegida sea "dependiente de [la] jurisdicción" de la Parte pertinente.

52. Ese argumento fue presentado a la Comisión respecto a las solicitudes de 1974 y 1975, y fue rechazado por la Comisión en su decisión de 1975. Sin embargo, el Gobierno turco presentó nuevos argumentos de carácter jurídico y de carácter fáctico en las actuaciones de 1978, argumentos que el Gobierno turco consideraba que eran lo bastante diferentes de los aducidos anteriormente para hacer que la Comisión cambiara sus conclusiones. Sin embargo, la Comisión rechazó esos argumentos, en gran parte sobre la base de su decisión de 1975 y sin darles la consideración detallada que convenía a la decisión de un órgano judicial. Como esa cuestión es suficiente por sí misma para excluir la competencia de la Comisión, es evidente que tiene cierta importancia. El Gobierno de Turquía volverá a exponer, por consiguiente, sus principales alegaciones sobre esa cuestión, comentando al mismo tiempo el modo insatisfactorio en que la Comisión se ha ocupado de ellas.

53. El punto esencial de las opiniones de la Comisión se expone en los párrafos 21 y 22, "La cuestión de derecho", de su decisión de 1978, en forma de una repetición de lo que la Comisión dijo en su decisión de 1975:

"... las Altas Partes Contratantes están obligadas a reconocer dichos derechos y libertades a todas las personas bajo su autoridad y responsabilidad efectivas, ya se ejerza esa autoridad en su propio territorio o en el extranjero";

y más adelante

"... los agentes autorizados de un Estado, incluidos los agentes diplomáticos o consulares y las fuerzas armadas, no sólo siguen sujetos a su jurisdicción cuando se hallan en el extranjero, sino que hacen a cualesquiera otras personas o bienes 'dependientes de la jurisdicción' de ese Estado, en la medida en que ejerzan autoridad sobre esas personas o bienes. En tanto en cuanto, por sus acciones u omisiones, afecten a esas personas o bienes, comprometen la responsabilidad del Estado."

54. El Gobierno de Turquía alegó y alega que la conclusión a que ha llegado la Comisión es errónea por las siguientes razones:

A. Su interpretación del artículo 1 es contraria a los travaux préparatoires;

B. Su interpretación del artículo 1 es incompatible con los términos de los artículos 63 y 65 de la Convención;

C. Consideraciones prácticas militan en contra de la interpretación adoptada por la Comisión;

D. Además, aunque la Comisión estuviese acertada en su interpretación del artículo 1, no ha aplicado satisfactoriamente su propio concepto del ejercicio de autoridad.

55. Cada uno de esos puntos se examinará ahora más detalladamente.

A. La interpretación de la Comisión es contraria a los travaux préparatoires del artículo 1

56. La posibilidad del recurso a los travaux préparatoires de la Convención, como una ayuda para su interpretación, está establecida en la jurisprudencia de la propia Comisión. Procede, por tanto, señalar que los travaux préparatoires contradicen la interpretación del artículo 1 adoptada por la Comisión, que ese punto fue plenamente desarrollado ante la Comisión en los argumentos de 1978, y que la Comisión no hizo ninguna referencia a ese punto en su decisión. En consecuencia, la Comisión no sólo ha llegado a una conclusión sustantivamente errónea, sino que además no ha actuado judicialmente.

57. El texto del primer proyecto de la Convención se refería a "toda persona que resida en el territorio" de una Parte (véase el artículo 1 del proyecto de Convención Europea sobre Derechos Humanos presentado por el Movimiento Europeo al Comité de Ministros del Consejo de Europa en julio de 1949). Seguidamente, la Comisión Jurídica aprobó (el 8 de septiembre de 1949) propuestas encaminadas a ampliar ese concepto, de modo que abarcara a todas las personas que residieran en ultramar, al igual que a las residentes en los territorios metropolitanos de las Partes. Surgió la cuestión de si la protección de la Convención se extendería a los nacionales de países no miembros (véase el Informe preparatorio de la Secretaría General del Consejo de Europa). Posteriormente, en febrero de 1950, una Subcomisión rechazó la propuesta de que las palabras "que resida" fueran reemplazadas por las palabras "que viva", basándose en que esta última expresión "podía producir cierta ambigüedad". En su lugar, la Subcomisión sugirió que las palabras "que resida" fueran reemplazadas por las palabras "dependiente de su jurisdicción". No hubo en ese momento ninguna sugerencia en el sentido de que la enmienda pretendiera extender la protección de la Convención a personas que vivieran fuera del territorio de una de las Partes y tuvieran en el extranjero cierto contacto con las autoridades de esa Parte.

58. La evolución fue resumida en el proyecto de informe preliminar del Comité de Expertos del Comité de Ministros de 24 de febrero de 1950. Al comentar el artículo 1, ese Comité dijo:

"El proyecto presentado a la Asamblea ha extendido los beneficios de la Convención a 'toda persona que resida en los territorios de los Estados signatarios'. A juicio del Comité, el término 'que resida' puede considerarse demasiado restrictivo. Se estima que hay fundamento suficiente para extender los beneficios de la Convención a todas las

personas que se hallen en los territorios de los Estados signatarios, aun a aquéllas que no pueda considerarse que residen en ellos en el sentido jurídico de la palabra. No obstante, esa palabra no tiene el mismo significado en todas las legislaciones nacionales. Por consiguiente, el Comité reemplazó las palabras 'que resida' por las palabras 'dependiente de su jurisdicción', que figuran también en el artículo 2 del proyecto de Pacto de la Comisión de las Naciones Unidas." (Se ha añadido el subrayado)

Esa explicación, que figuraba en el proyecto de informe del Comité de Expertos, fue incorporada literalmente a su informe de 16 de marzo de 1950.

59. Algunos meses más tarde, Henri Rolin - el distinguido jurista belga que había estado íntimamente relacionado con la formulación del proyecto - indicó, en el segundo período de sesiones de la Asamblea Consultiva (sesión plenaria de 25 de agosto de 1950), su propia interpretación del artículo 1 en los siguientes términos:

"... por consiguiente, el derecho de protección por parte de nuestros Estados, en virtud de una cláusula formal de la Convención, puede ejercerse plenamente, y sin ninguna diferenciación o distinción, en favor de personas de cualquier nacionalidad que, en el territorio de cualquiera de nuestros Estados, puedan haber tenido razón para estimar que sus derechos han sido violados." (Se ha añadido el subrayado)

60. El contexto en que se hizo esa declaración fue el de que el Profesor Rolin estaba indicando "tres reformas casi revolucionarias" que se realizaban en la Convención. Si hubiera pensado que ésta iba tan lejos como para permitir que la protección se aplicara extraterritorialmente, siempre que existiera el vínculo de alguna extensión administrativa de la autoridad de una de las Partes, es poco probable que hubiera dejado de señalar esa característica como otra "reforma revolucionaria".

61. Resumiendo, los travaux préparatoires de la Convención indican claramente que la interpretación adoptada por la Comisión es errónea. La expresión "dependiente de su jurisdicción" pretendía evidentemente referirse al territorio de cada una de las Partes y no al comportamiento en cualquier territorio extranjero no sujeto a la soberanía de esa Parte.

B. Contradicción entre la posición de la Comisión y los artículos 63 y 65 de la Convención

62. Además de la falta de coincidencia entre la interpretación de la Comisión y los travaux préparatoires de la Convención, es necesario destacar la contradicción entre la interpretación de la Comisión y otras partes pertinentes del texto de la propia Convención, a saber, los artículos 63 y 65.

63. Una vez más, este argumento, que fue plenamente desarrollado ante la Comisión, no fue reflejado en su decisión.

1) El artículo 63

64. El artículo 63 contiene cuatro párrafos dispositivos. En el primero, se prevé que toda Parte en la Convención puede hacer declaraciones que extiendan su aplicación a todos los territorios de cuyas relaciones internacionales esté encargada. En el segundo, se especifica el plazo a partir del cual tendrá validez esa notificación. El tercero permite que las obligaciones de una Parte en virtud de la Convención se modifiquen a fin de tener debidamente en cuenta las necesidades locales. El cuarto permite que el derecho de petición individual se extienda a cualquiera de esos territorios.

65. Un principio elemental de interpretación de los tratados, reflejado ahora en el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, establece que un tratado deberá interpretarse conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a sus términos en el contexto de éstos, y teniendo en cuenta su objeto y fin. Eso significa, por supuesto, que el tratado debe leerse como un todo, de modo que sus partes sean coherentes entre sí.

66. Si la Convención se considera de ese modo, es evidente que la interpretación dada por la Comisión a la palabra "jurisdicción" en el artículo 1 haría innecesarios los dos primeros párrafos del artículo 63. Según esa interpretación, queda claro que las personas que se hallen en un territorio de cuyas relaciones internacionales esté encargada, y que, en circunstancias habituales, administre, serían personas "dependientes de [la] jurisdicción" de esa Parte. En consecuencia, las disposiciones de la Convención se aplicarían en esos territorios, aunque no se hiciera ninguna declaración con arreglo a los párrafos 1 y 2 del artículo 63. La Comisión no evita el problema de la redundancia de los párrafos 1 y 2 del artículo 63 con la oración incluida en el párrafo 9 de la sección sobre "La cuestión de derecho" de la decisión de 1975 respecto a las dos solicitudes previas:

"La finalidad del artículo 63 no sólo es la extensión territorial de la Convención, sino también su adaptación a las medidas de autogobierno alcanzadas en ciertos territorios no metropolitanos y a las diferencias culturales y sociales de esos territorios."

Incluso como explicación - si bien discutible 3/ - de la presencia del tercer párrafo del artículo 63, no explica la presencia de los dos primeros párrafos. Por otra parte, una vez que se da al concepto de "jurisdicción" en el artículo 1 su significado apropiado, que es más estricto, la totalidad del artículo 63 queda en el lugar que le corresponde.

3/ Con la cita anteriormente mencionada del informe, la Comisión ha añadido al párrafo 3 del artículo 63 varios criterios que no tienen fundamento alguno en esa disposición, como los de "autogobierno", "ciertos territorios" o "diferencias culturales y sociales".

ii) El artículo 65

67. Un argumento similar al basado en el artículo 63 se presentó también a la Comisión en relación con el párrafo 4 del artículo 65. Se trata del último párrafo del artículo sobre la denuncia de la Convención, y en él se establece que

"La Convención podrá ser denunciada de acuerdo con lo previsto en los párrafos precedentes, respecto a cualquier territorio en el cual haya sido declarada aplicable en los términos del artículo 63."

Sin embargo, si la Comisión está acertada en su interpretación amplia del concepto de "jurisdicción", una Parte que continúe ejerciendo cierto grado de autoridad administrativa en un territorio respecto al cual haya notificado la denuncia, seguirá aún obligada a asegurar en él la aplicación de la Convención. No es esa evidentemente la intención de la Convención, lo que sugiere que la interpretación dada por la Comisión es errónea.

C. Consideraciones prácticas que militan en contra de la posición adoptada por la Comisión

68. El error de la interpretación dada por la Comisión al concepto de "jurisdicción" en el artículo 1 resulta aún más evidente cuando se considera el asunto en términos prácticos concretos. La Comisión manifestó en la decisión de 1975 que "los agentes autorizados de un Estado, incluidos los agentes diplomáticos o consulares y las fuerzas armadas, no sólo siguen sujetos a su jurisdicción cuando se hallan en el extranjero, sino que hacen a cualesquiera otras personas y bienes 'dependientes de la jurisdicción' de ese Estado, en la medida en que ejerzan autoridad sobre esas personas o bienes" 4/. La Comisión citó ese pasaje en la decisión de 1978 5/ y evidentemente lo considera correcto en derecho y base suficiente para tratar a los que se alegue que han sido víctimas de violaciones de los derechos humanos en Chipre septentrional como dependientes de la jurisdicción de Turquía.

69. Sin embargo, como se alegó ante la Comisión, sin que ésta diera consideración alguna al tema en su decisión de 1978, la proposición de que se hace a las personas "dependientes de la jurisdicción" de un Estado en la medida en que agentes autorizados de ese Estado actúen en la zona en que se hallan, entraña una extensión importante, inesperada y probablemente inaceptable de la obligación de las Partes en la Convención. Pues siempre que una Parte, por conducto de sus agentes, sus fuerzas armadas o incluso su servicio diplomático, estable alguna relación en el extranjero con una persona, ésta tendría derecho - según parece - a exigir de esos agentes un trato de conformidad con la Convención.

4/ Página 136, párrafo 8.

5/ Página 151, párrafo 20.

70. El punto es lo bastante sorprendente para justificar una consideración más detallada, en particular porque, una vez más, la Comisión lo ha evadido totalmente en su decisión.

71. Varias partes en la Convención aportan fuerzas armadas, de vez en cuando, para el cumplimiento de operaciones de mantenimiento de la paz u otros servicios comparables en el extranjero. Un ejemplo tan bueno como cualquier otro es la UNFICYP, la Fuerza de las Naciones Unidas de Mantenimiento de la Paz en Chipre. De los Estados que aportan personal militar a esa Fuerza, no menos de cinco son Partes en la Convención: Austria, Dinamarca, Irlanda, el Reino Unido y Suecia. Cada una de esas Partes ha aceptado el derecho individual de petición. Si la Comisión está acertada al considerar que las fuerzas armadas hacen a otras personas o bienes dependientes de la jurisdicción de su Estado en la medida en que esas fuerzas actúen en la zona en que se hallen esas personas o bienes, es necesario entonces reconocer que pueden existir situaciones en las que podría considerarse que el comportamiento de las fuerzas dedicadas a actividades de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas está incluido en el ámbito de aplicación de la Convención. No se elimina esa posibilidad diciendo que las fuerzas de las Naciones Unidas actúan bajo la responsabilidad de las Naciones Unidas y, por ello, representan una extensión de la jurisdicción de las Naciones Unidas, no de la jurisdicción de los Estados que aportan contingentes. Pues esa afirmación sería sólo parcialmente correcta. Es cierto que, con arreglo a la pauta general de las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, el comandante de la fuerza tiene una responsabilidad general por el buen orden de ésta, en tanto que la propia fuerza puede incluso ser un órgano subsidiario de las Naciones Unidas. Sin embargo, en cada caso, la responsabilidad por las acciones disciplinarias en los contingentes nacionales sigue correspondiendo a los comandantes de esos contingentes.

72. En el caso de la UNFICYP, en el párrafo 11 del acuerdo establecido entre las Naciones Unidas y la administración grecochipriota, se establece expresamente que,

"Los miembros de la Fuerza estarán sujetos a la jurisdicción exclusiva de sus respectivos Estados nacionales respecto a cualquier delito que puedan cometer en Chipre."

Como virtualmente todos los actos que en la solicitud se alega que representan violaciones de la Convención son actos que normalmente se considerarían delictivos, parece que, si tales actos fueran cometidos por miembros de la UNFICYP, estarían sujetos a la jurisdicción nacional, no a la de las Naciones Unidas. Además, según la interpretación de la palabra "jurisdicción" adoptada por la Comisión, podría hacerse responsables a los Estados que aportan los contingentes de violaciones de la Convención.

73. De ese modo, se introduce una dimensión enteramente nueva en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, una dimensión en la que existe una diferencia en el ámbito de la responsabilidad en que pueden incurrir los Estados que aporten contingentes, según sean o no partes en la Convención y según hayan aceptado o no el derecho individual de petición.

74. Algo muy similar puede decirse de cualquier otro acto cometido en el extranjero por las fuerzas armadas de una Parte en la Convención. Por eso, cuando miembros de las fuerzas armadas de la República Federal de Alemania aterrizaron en Mogadishu, Somalia, para liberar a los pasajeros secuestrados por terroristas, llevaban con ellos las disposiciones de la Convención, disposiciones que, en ciertas circunstancias concebibles, podían haber sido invocadas por los terroristas. De modo similar, cuando contingentes de Francia y Bélgica intervinieron con fines humanitarios en el Zaire en 1978, expusieron a sus Gobiernos a la posible invocación de la Convención contra ellos. Una vez más, poniendo la proposición en forma de pregunta, ¿en qué medida las tropas británicas, francesas e italianas que participaron en la fuerza multinacional en el Líbano en 1983/1984 llevaron la Convención Europea de Derechos Humanos a Beirut? Y ¿es compatible con el concepto de uniformidad de aplicación de la Convención que los civiles libaneses que se hallaban en zonas patrulladas por esas fuerzas gozaran de la protección de la Convención, en tanto que las personas que se hallaban en las zonas patrulladas por los Estados Unidos no gozaban de ella? El hecho de que las posibilidades de tal invocación sean remotas, o de que puedan oponerse buenos argumentos sustantivos a acusaciones fantasiosas o exageradas, no disminuye las consecuencias teóricas de la interpretación dada por la Comisión a la palabra "jurisdicción" en el artículo 1. Esas consecuencias parecen quedar bastante fuera de las expectativas de las Partes en la Convención y, por esa razón entre otras, sugieren que la interpretación es errónea y requiere un nuevo examen.

D. Falta de aplicación satisfactoria por la Comisión de su propio concepto del ejercicio de autoridad

75. Además del error de interpretación señalado en las secciones anteriores, es necesario indicar que, incluso en los términos de su propia interpretación, la Comisión no ha aplicado adecuadamente el concepto de "jurisdicción".

76. La Comisión ha resaltado que las personas y bienes son dependientes de la jurisdicción de una Parte en la medida en que agentes autorizados de esa Parte ejercen autoridad sobre dichas personas o bienes. Por lo tanto, no hay nada que sea evidente por sí mismo respecto a si una persona o bien depende de la jurisdicción de una Parte. El hecho de que un agente de esa Parte y una persona o un artículo de su propiedad estén en el mismo lugar no establece, por sí mismo, que esa persona o bien sea objeto de un ejercicio de autoridad por el agente que resulte suficiente para hacer que la persona o el bien dependan de la jurisdicción de la Parte. Es evidente que hay que considerar las circunstancias particulares de cada caso.

77. Por consiguiente, cabía esperar que, antes de concluir que las personas y bienes respecto de los cuales se presentaba la solicitud dependían de la "jurisdicción" de Turquía, la Comisión hubiera examinado la situación con cierto detalle. Por el contrario, la Comisión simplemente reafirmó en términos generales que, en virtud de la presencia de tropas turcas en la zona

septentrional de la República de Chipre, existía allí una jurisdicción de Turquía, y no la excluía la razón alegada de que la jurisdicción en la zona era ejercida por el Estado Federado Turco de Chipre 6/.

78. Además, al concluir esa sección de su decisión con la afirmación de que "esta conclusión no prejuzga la imputabilidad a Turquía de cualquier violación concreta de la Convención que pueda establecerse al examinar el fondo de esta cuestión", la Comisión decidió de hecho que la cuestión de si se cumplen los requisitos del artículo 1 de la Convención no es una cuestión de admisibilidad.

79. Para apreciar el carácter tan extraordinario de la posición adoptada por la Comisión, es necesario examinar atentamente el significado de la palabra "autoridad" usada en la frase "en la medida en que ejerzan autoridad sobre esas personas o bienes".

80. Hay que distinguir dos situaciones: la primera es aquella en que sólo existe una posible "autoridad". La segunda se da cuando puede haber más de una.

81. Cuando sólo hay una posible autoridad en una zona, puede suponerse que posee la plenitud de la soberanía o facultades gubernamentales. En consecuencia, todo lo que se haga en la zona bajo su control quedará incluido prima facie en su autoridad o "jurisdicción". Ese es el caso del Gobierno turco en Turquía, como es también el caso de las autoridades grecocipriotas en la parte meridional de Chipre. Era también el caso del Gobierno del Estado Federado Turco de Chipre en Chipre septentrional. Sin embargo, no era el caso de las fuerzas turcas en el territorio de ese Estado Federado. No era ese el caso en 1975, y ciertamente no lo era en 1978, y mucho menos lo es hoy. Como se subrayará ahora, las fuerzas turcas no eran la "única autoridad posible" en Chipre septentrional.

82. La segunda situación es aquella en que puede haber más de una "autoridad" dentro de un territorio determinado. En ese caso, a los efectos de determinar quién tiene "jurisdicción" en el sentido del artículo 1 de la Convención, resulta necesario someter a un escrutinio muy detallado qué órgano ejerce autoridad, en qué lugares, con qué fin y con sujeción a qué condiciones. Sin embargo, en su decisión de 1975 sobre admisibilidad, la Comisión no efectuó ese tipo de escrutinio, no trató de determinar cuáles podían ser los límites de la competencia de cada uno. En la última parte del párrafo 10 de la sección dedicada a "La cuestión de derecho" de la decisión de 1975, la Comisión, tras señalar que las fuerzas armadas turcas habían entrado en Chipre y actuado allí sólo bajo la dirección del Gobierno de

6/ Véase la decisión de 1978, págs. 151 y 152, párrs. 23 a 25. El Estado Federado Turco de Chipre es el predecesor de la República Turca de Chipre Septentrional.

Turquía, concluyó que las fuerzas armadas turcas hicieron a "cualesquiera otras personas o bienes en Chipre 'dependientes de la jurisdicción' de Turquía, en el sentido del artículo 1 de la Convención, en la medida en que ejerzan control sobre esas personas o bienes". La misma posición fue adoptada en la decisión de 1978.

83. La Comisión concedió que la "jurisdicción" dependía de la "medida en que se ejerza control". Sin embargo, ni la decisión de 1975 ni la de 1978 reflejan ningún análisis, en la etapa de la admisibilidad, de la medida en que existía un control turco. El Gobierno de Turquía sostiene que eso es erróneo, y aún más si se recuerda que, en la época de esas decisiones, la Comisión tenía conocimiento de la existencia de la Declaración de Ginebra de 30 de julio de 1974, un instrumento internacional suscrito por los Ministros de Relaciones Exteriores de Grecia, Turquía y el Reino Unido. En esa declaración se manifestaba, entre otras cosas, que:

"Los Ministros tomaron nota de que, en la práctica, en la República de Chipre existían dos administraciones autónomas: la de la comunidad grecochipriota y la de la comunidad turcochipriota."

No obstante, en 1978, la tendencia de desarrollo en el Estado Federado Turco de Chipre, que ya era identificable en 1975 - pero que la Comisión no identificó entonces - había avanzado considerablemente, y era bastante erróneo que la Comisión llegara a la misma conclusión en 1978 que en 1975 respecto a la cuestión de la jurisdicción en Chipre septentrional.

84. Durante el debate celebrado ante la Comisión en julio de 1978, el Gobierno de Turquía presentó a la Comisión material detallado que indicaba que Turquía no ejercía, en ningún aspecto específicamente pertinente para la solicitud, jurisdicción en la zona afectada por ésta. Antes de comentar el modo inadecuado en que la Comisión trató esa conclusión, quizá sea conveniente indicar de un modo más cabal la naturaleza de la conclusión presentada por Turquía a ese respecto.

85. El Gobierno de Turquía, aunque no negaba la presencia de fuerzas turcas en Chipre septentrional, manifestó que esas fuerzas estaban presentes allí a petición y con el consentimiento de la autoridad que gobernaba la zona pertinente, el Estado Federado Turco de Chipre. Había que considerar, pues, la realidad de la existencia de ese Estado. El Gobierno de Turquía afirmó que existía en Chipre septentrional una verdadera administración local, de cuya "jurisdicción" dependían personas y bienes en esa zona. No se trataba de una invención del Gobierno turco, como lo demuestra la declaración hecha el 30 de julio de 1974 por los Ministros de Relaciones Exteriores de Grecia, Turquía y el Reino Unido, mencionada en el párrafo 83 supra, así como el análisis de la situación en el fallo de Lord Denning, en el tribunal inglés de apelación en el asunto de Hesperides Hotels contra Aegean Turkish Holidays [1978] 1 All ER 277, págs. 283 y 284. Ese análisis no ha sido afectado por las actuaciones subsiguientes en ese asunto ante la Cámara de los Lores.

86. Sin embargo, pese al detalle con que esa cuestión fue desarrollada ante la Comisión en las audiencias celebradas en julio de 1978, la Comisión no captó en absoluto el punto fundamental. Eso no ocurrió porque la Comisión considerara que las decisiones sobre cuestiones de hecho quedaban fuera de su competencia. Como es evidente en el párrafo 23 de la decisión de 1978 ("La cuestión de derecho", la Comisión estaba dispuesta - sin basarse en ningún examen de las pruebas - a adoptar una decisión firme de que en esa fecha "la restricción del ejercicio actual de jurisdicción por el Gobierno solicitante, como Gobierno de la República de Chipre, se [debía] a la presencia de fuerzas armadas turcas al norte de la isla". Parece que la Comisión no consideró la posibilidad de que, a diferencia de lo que ocurría en 1974, la situación en 1978 podía ser que la verdadera restricción al ejercicio de jurisdicción por parte del Gobierno solicitante en la parte septentrional de Chipre era la cristalización allí de una administración civil local autónoma, el Estado Federado Turco de Chipre. (De hecho, en 1983, el Estado Federado Turco de Chipre se convirtió en un Estado independiente, la República Turca de Chipre Septentrional, que ejerce plena jurisdicción y soberanía en la parte septentrional de la isla, y Turquía ha reconocido a ese Estado independiente.)

87. Las deficiencias de la decisión de la Comisión a ese respecto son graves, tanto en cuestiones de procedimiento como de fondo. Para apreciar su gravedad, es necesario recordar el modo que el Gobierno de Turquía presentó a la Comisión el material pertinente para el ejercicio de autoridad y jurisdicción en la parte septentrional de Chipre.

i) La argumentación "negativa"

88. En primer lugar, el Gobierno de Turquía expuso la situación en términos "negativos", es decir, negando que ejerciera en la zona y el momento pertinentes un grado de autoridad conmensurado con la atribución automática o en masa a Turquía de responsabilidad por las supuestas violaciones continuas de la Convención.

89. Es cierto que siempre es difícil la prueba de cualquier proposición negativa. En consecuencia, el Gobierno de Turquía concluyó que, aparte de dejar constancia de un punto concreto, la elaboración de su posición debía basarse en la argumentación positiva.

90. El punto concreto del que valía la pena dejar constancia eran las alegaciones de saqueo. Ese punto proporcionaba una ilustración conveniente y precisa del modo en que podía tergiversarse el efecto de la presencia de fuerzas turcas en Chipre septentrional. Esa alegación se detallaba de un modo particularmente vago en el párrafo 29 de los Pormenores de 1º de noviembre de 1977 con las siguientes palabras:

"Ha continuado el saqueo por tropas turcas o con su apoyo de cantidades apreciables de artículos comerciales y otros bienes muebles de grecochipriotas que poseían establecimientos comerciales y otros locales en las zonas ocupadas por Turquía, especialmente en la zona de Famagusta."

Con una redacción notablemente similar, aparecía una referencia a la misma cuestión en el informe del Secretario General de las Naciones Unidas (S/12723, de 31 de mayo de 1978, párr. 24):

"Durante el período que se examina, importantes cantidades de mercaderías y otros bienes muebles fueron sustraídas de viviendas y otros locales en la nueva ciudad de Famagusta (Varosha), lo que dio lugar a denuncias de saqueo. Las autoridades turcochipriotas han indicado a la UNFICYP que se llevan registros y que, en caso de llegarse a un acuerdo político, se dará cuenta de ciertos bienes que han sido confiscados."

91. Aunque no ha sido posible determinar la razón por la que el informe del Secretario General sigue tan de cerca la redacción de los Pormenores, dos puntos fueron señalados a la atención de la Comisión.

92. El primero era que el informe del Secretario General no atribuía el saqueo a las fuerzas turcas. El segundo, que el informe se refería expresamente a relaciones de la UNFICYP con "las autoridades turcochipriotas" respecto a ese asunto. No hay referencia alguna a la participación de las fuerzas turcas en cualquier forma que sea.

93. Por ello, tomando el ejemplo anterior como indicación, es evidente que la simple presencia de fuerzas turcas en la parte septentrional de Chipre no puede presentarse vagamente como la base para atribuirles responsabilidad por todo acto que supuestamente constituya una violación de la Convención. Sin embargo, la Comisión no tuvo en cuenta ese argumento y se adhirió, en cambio, a un punto de vista expresado tres años antes en relación con hechos que no podía suponerse que hubieran permanecido sin variación a lo largo del período siguiente y que, en realidad, habían variado. La Comisión repitió ese error en su informe de 1983, cuando concluyó, tras el examen más breve posible de la cuestión, que los actos del Estado Federado Turco de Chipre debían considerarse imputables a Turquía 7/.

ii) La argumentación "positiva"

94. La conclusión de que toda la autoridad gubernamental pertinente respecto a la alegada continuación de las supuestas violaciones de la Convención correspondía al Estado Federado Turco de Chipre y no a las fuerzas turcas se desarrolló también de un modo positivo, mediante una demostración cabal de la amplitud de la autoridad del Estado Federado Turco de Chipre en la zona. Esa demostración adoptó la forma de una exposición del Magistrado Ertekun, asesor jurídico del interlocutor turcochipriota en las conversaciones intercomunitarias y anteriormente Presidente del Tribunal Supremo del Estado Federado Turco de Chipre, quien, basándose en su conocimiento especial de la situación, pudo exponer la situación clara y cabalmente y de un modo autorizado.

7/ Opinión de 1983, pág. 16, párrs. 63 y 64. Véase también párr. 99, infra.

95. En su declaración, el Sr. Ertekun proporcionó a la Comisión indicaciones precisas de la existencia y el alcance de la autoridad sustancial turcochipriota en la parte septentrional de Chipre con el nombre de Estado Federado Turco de Chipre. Eso requería, al menos, que la Comisión examinara dónde residía la autoridad efectiva en esa zona. La Comisión hizo caso omiso, equívocadamente, de la importante información proporcionada por el Sr. Ertekun.

96. La Comisión no se refirió a ninguno de los detalles dados por el Sr. Ertekun. Era como si el argumento no hubiera sido presentado, y como si no hubiera habido una evolución del poder gubernamental del Estado Federado Turco de Chipre desde 1975. La Comisión, en cambio, dijo lo siguiente:

"Es forzoso señalar, sin embargo, ... [1] que, desde 1974, se ha impedido a una de las Altas Partes Contratantes, Chipre, ejercer su jurisdicción en la parte septentrional de su territorio por la presencia allí de fuerzas armadas de otra Alta Parte Contratante, Turquía; [2] que el reconocimiento por Turquía de la administración turcochipriota en esa zona como 'Estado Federado Turco de Chipre' no afecta, según las propias conclusiones del Estado demandado, a la continua existencia de la República de Chipre como un solo Estado y como Alta Parte Contratante de la Convención; y [3] que, por consiguiente, el 'Estado Federado Turco de Chipre' no puede ser considerado como una entidad que ejerce 'jurisdicción', en el sentido del artículo 1 de la Convención, sobre ninguna parte de Chipre."

97. En relación con la primera de esas observaciones, el Gobierno de Turquía ya ha comentado que en ella se establece una conclusión respecto al papel de las fuerzas turcas a la que se ha llegado, evidentemente, sin prestar consideración alguna al surgimiento del Estado Federado Turco de Chipre y al hecho de que ese Estado - como administración civil efectiva -, y no las fuerzas turcas, puede ser la verdadera inhibición del ejercicio de la jurisdicción del régimen grecochipriota en la parte septentrional de Chipre.

98. En cuanto a la segunda observación, nunca fue cierta más que parcialmente. Era un hecho que en 1978 el Estado Federado Turco de Chipre aún se consideraba como el futuro elemento turcochipriota de un Estado de Chipre federal y reunido. Sin embargo hasta el logro de esa reunión, el Estado Federado Turco de Chipre funcionaba como una entidad independiente de la República de Chipre, administrada por el régimen grecochipriota. Además, lo que no es menos pertinente, el Estado Federado Turco de Chipre se consideraba, por sucesión, una parte separada en la Convención Europea de Derechos Humanos y el órgano apropiado para recibir denuncias relativas al incumplimiento de la Convención en la parte septentrional de Chipre. Eso fue manifestado expresamente a la Comisión durante los alegatos orales el 6 de julio de 1978.

99. Que el Estado Federado Turco de Chipre, como su sucesora, funcionaba como una entidad independiente, separada de la administración grecochipriota, lo atestigua el hecho de que la UNFYCIP ha aceptado desde el principio el mandato de las autoridades turcochipriotas.

Además, el Secretario General de las Naciones Unidas, en sus informes oficiales al Consejo de Seguridad, siempre ha enumerado a la parte turcochipriota - junto a Turquía, Grecia, el Reino Unido y la parte grecochipriota - como las partes cuyo consentimiento habían solicitado las Naciones Unidas para la prórroga del mandato de la UNFICYP. La práctica continúa tras la proclamación de la República Turca de Chipre Septentrional.

Por encima y más allá del reconocimiento por las Naciones Unidas de la existencia de una autoridad turcochipriota separada, primero autónoma y ahora independiente, en Chipre, numerosos Estados mantienen contactos regulares con las autoridades turcochipriotas. Algunos incluso mantienen una presencia en la parte turcochipriota a fin de realizar negocios. Lo más importante es que los grecochipriotas siempre han aceptado a la parte turcochipriota como una contraparte en las negociaciones para un arreglo sobre Chipre, y que las dos partes han concertado varios acuerdos, incluidos los Acuerdos de Alto Nivel Denktas-Kyprianou de 1979.

Esos hechos prueban, más allá de cualquier duda legítima, que en la parte septentrional de Chipre existía y continúa existiendo una autoridad turcochipriota plenamente competente y ahora plenamente soberana, que tiene jurisdicción y control exclusivos sobre su territorio, así como la responsabilidad completa respecto a sus asuntos.

100. En cuanto a la tercera observación hecha por la Comisión en la parte de su decisión anteriormente citada, pese a su introducción mediante la palabra "por consiguiente", es en verdad un total non-sequitur. ¿Qué hay en cualquiera de las dos primeras observaciones que lleve lógicamente a la conclusión de que el Estado Federado Turco de Chipre "no puede ser considerado como una entidad que ejerce 'jurisdicción', en el sentido del artículo 1 de la Convención, sobre ninguna parte de Chipre"? A falta de debate y del rechazo de las pruebas relativas a la existencia del Estado Federado Turco de Chipre, no puede decirse que la simple presencia de fuerzas turcas en la parte septentrional de Chipre significa que el Estado Federado Turco de Chipre no ejerce jurisdicción en ella. Tampoco el hecho de que Turquía reconozca la personalidad unificada de un solo Estado de Chipre, aunque no al régimen grecochipriota como el gobierno del mismo, es pertinente en modo alguno en relación con la cuestión de si el Estado Federado Turco de Chipre ejercía "jurisdicción" en la parte septentrional de Chipre.

III. En cuanto al agotamiento de los recursos internos y la observancia de la regla de los seis meses

101. El Gobierno de Turquía ya se ha referido a los dos aspectos principales en los que la Comisión ha incurrido en error: las cuestiones del locus standi y de la "jurisdicción". Por cada uno de esos dos motivos la Comisión debió haber decidido que la petición era inadmisibile; y cualquiera de ellos habría sido motivo suficiente para terminar los procedimientos.

102. Sin embargo, resta considerar otras cuatro objeciones a la admisibilidad de la solicitud desestimadas por la Comisión.

103. La primera de ellas es la alegación de que no se han agotado los recursos internos, según exige el artículo 26 de la Convención. A este respecto, el Gobierno de Turquía se limita a señalar - como reflejo de la naturaleza del enfoque que la Comisión dio a su tarea - que, a pesar del lugar notoriamente subordinado que el Gobierno de Turquía otorgó a esta objeción en su argumentación oral, la Comisión dedicó al asunto casi tanto espacio como a las dos objeciones principales del Gobierno de Turquía. Esto tal vez no importara mucho si la consideración de dichas objeciones principales hubiera sido completa y persuasiva. Pero la superficialidad y la inadecuación del tratamiento de las dos primeras objeciones resaltan aún más ante el tratamiento tan extenso que dio la Comisión a la objeción relativamente poco importante de la falta de agotamiento de los recursos internos.

104. Al mismo tiempo, el Gobierno de Turquía estima que se debe señalar en particular uno de los párrafos del examen de los recursos internos, como ilustración de la forma desaprensiva y excesivamente generalizada en que la Comisión enfocó este asunto.

105. La Comisión se refirió al material presentado por el Gobierno de Turquía en lo tocante a la disponibilidad de recursos en el sistema jurídico del Estado Federado Turco de Chipre (véase la decisión 1978, "Derecho", párr. 35). En el párrafo siguiente (párr. 36), la Comisión dijo:

"... la abrumadora mayoría de los chipriotas griegos, cuyos derechos y libertades con arreglo a la Convención se denuncia que han sido violados, residen actualmente en la parte meridional de Chipre controlada por el Gobierno recurrente y no se les permite entrar en la parte septentrional de la República que ... desde 1974 ha estado bajo la jurisdicción del Gobierno recurrido. En tales circunstancias, los recursos que pudiera decirse que están a disposición de dichos chipriotas griegos en la zona septentrional no pueden en principio considerarse 'practicables'."

106. El Gobierno de Turquía tiene los comentarios siguientes que formular sobre dicho párrafo:

- i) El cometido de la Comisión es examinar las denuncias de violaciones de los derechos humanos que afectan a personas concretas identificables, y no a una masa generalizada de personas. Por consiguiente, la admisibilidad de cualquier solicitud debe verificarse refiriéndose a las circunstancias de las personas concretas cuyos derechos se dice que han sido violados. Por lo tanto, es totalmente inapropiado que la Comisión hable de una "abrumadora mayoría" de chipriotas griegos cuyos derechos se denuncia que han sido violados. Para que una solicitud en la que se alegan violaciones múltiples de la Convención se declare admisible, debe ser admisible en todos los aspectos, y no simplemente en la mayoría de los casos;
- ii) Las mismas consideraciones sugieren que es igualmente inapropiado que la Comisión determine que "los recursos que pudiera decirse que están a [su] disposición ... no pueden en principio considerarse

'practicables'" (subrayado agregado). En una situación en que debe decidir respecto de casos concretos haciendo referencia a las pruebas disponibles, la Comisión no tiene derecho a recurrir a generalidades del tipo que se refleja en la utilización de las palabras "en principio";

- iii) La Comisión afirma que Chipre septentrional "ha estado desde 1974 bajo la jurisdicción del Gobierno recurrido". Como ya lo ha expresado el Gobierno de Turquía, tal no es el caso. La sola presencia de tropas turcas en Chipre septentrional no coloca a esa zona dentro de la jurisdicción de Turquía - de todos modos cuando existen, como las hay, pruebas claras del ejercicio de jurisdicción por las autoridades del Estado Federado Turco de Chipre. Además, esa forma de expresión va en contra de la opinión expresada por la propia Comisión de que la existencia de jurisdicción en una situación de este tipo se relaciona concretamente con "la medida en que los agentes autorizados del Estado ejercen jurisdicción sobre las personas o los bienes".

IV. En cuanto a la objeción de que la presente solicitud es la misma que las peticiones No. 6780/74 y 6590/75

107. En sus observaciones escritas, el Gobierno de Turquía alego que la presente solicitud es inadmisibile, porque es sustancialmente la misma que la que se presentó ante la Comisión en dos solicitudes anteriores. Esa alegación fue expuesta detenidamente en la argumentación oral. La Comisión desestimó sumariamente la alegación en una manera que merece grandes críticas, por motivos procesales y sustantivos.

108. En cuanto al procedimiento, tal vez no sea necesario hacer más que comparar lo que la Comisión pretendió que fuera la reformulación de una de las alegaciones del Gobierno de Turquía con lo que realmente se dijo en nombre del Gobierno de Turquía. En los párrafos 48 y 49 de la decisión de 1978, la Comisión dice:

"El Gobierno recurrido se funda a este respecto en el 'reconocido principio jurídico general de que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma acusación' y en la jurisprudencia de la Comisión con arreglo al inciso b) del párrafo 1 del artículo 27 de la Convención ... La Comisión, habida cuenta de los términos claros del inciso b) del párrafo 1 del artículo 27, no puede concluir que esté autorizada con arreglo a la Convención a declarar inadmisibile una solicitud presentada con arreglo al artículo 24 por una Alta Parte Contratante por el motivo de que sea sustancialmente la misma que una anterior solicitud interestatal."

Lo que realmente se dijo en nombre del Gobierno de Turquía - como puede verse en las Actas Literales, Primer día, página 50 - fue lo siguiente:

"... Debo dejar en claro que el Gobierno de Turquía no se funda en la disposición del inciso b) del párrafo 1 del artículo 27 de la Convención en cuanto tal ... En cambio, nos fundamos en un principio más amplio

- del cual, empero, el artículo 27 es un reflejo. Ese principio más amplio se apoya en consideraciones básicas relacionadas con una sana conducta judicial." (La palabra "no" está subrayada incluso en el Acta Literal.)

109. La divergencia entre la forma en que la Comisión expuso el argumento y los verdaderos términos en que dicho argumento se había expresado es suficientemente grave por sí misma. Pero es evidente que, cuando un tribunal reproduce mal un argumento, la consideración judicial de dicho argumento resulta inevitablemente distorsionada y errónea. El Gobierno de Turquía dijo expresamente que no se fundaba en el inciso b) del párrafo 1 del artículo 27; la Comisión comienza su propia opinión sobre el tema diciendo "habida cuenta de los términos claros del inciso b) del párrafo 1 del artículo 27". Considerando que, como dice la propia Comisión, el artículo 27 sólo se refiere a las solicitudes individuales, el Gobierno de Turquía no puede comprender cómo los términos claros del artículo 27 pueden refutar un argumento que expresa y deliberadamente no se fundó en dicho artículo.

110. Entrando a la sustancia de la decisión de la Comisión, cabe señalar que la Comisión desestima en una línea un argumento que ocupó no menos de cuatro nutridas páginas mecanografiadas en los argumentos orales (págs. 53 a 57), donde se hizo una comparación detallada de la presente solicitud con las que anteriormente tuvieron ante sí la Comisión y el Comité de Ministros: "En todo caso", dijo la Comisión, "la presente solicitud no es idéntica a los casos anteriores". El Gobierno de Turquía no repetirá aquí la comparación detallada de las solicitudes a que se ha hecho referencia supra. Tal vez baste con la siguiente cita de las observaciones finales dirigidas a la Comisión sobre este punto:

"... las denuncias de violaciones del artículo 8 de la Convención y del artículo 1 del primer Protocolo se fundan idénticamente en los mismos hechos que los que ya se investigaron. Ambas son, en la forma y en el fondo, denuncias de un estado de cosas continuado, y no brindan material nuevo o adicional que pueda adecuadamente ser materia de una nueva indagación por parte de la Comisión." (Actas Literales, Primer día, pág. 56)

111. A juicio del Gobierno de Turquía, sigue teniendo fundamento sustancial su alegación de que el sistema de la Convención Europea de Derechos Humanos inhabilita a la Comisión para considerar una solicitud que, en sustancia y en esencia, contiene denuncias que son las mismas consideradas anterioremente por la Comisión.

112. La importancia del punto se vuelve aún más clara cuando se recuerda que las solicitudes anteriores habían sido consideradas no sólo por la Comisión sino también por el Comité de Ministros. Este último aspecto del asunto fue expuesto con más detalle por el Gobierno de Turquía en las argumentaciones orales, como parte de su alegación de que la presente solicitud es una duplicación de solicitudes que ya han pasado por todos los procedimientos contemplados por la Convención, incluido, en particular, el examen por el Comité de Ministros. Sin embargo, la Comisión trató separadamente la cuestión del efecto de la decisión del Comité de Ministros - punto que se examina a continuación en el presente memorándum.

V. En cuanto a si la Comisión está inhabilitada para conocer de la presente solicitud en virtud de la decisión del Comité de Ministros de 21 de octubre de 1977.

113. El Gobierno de Turquía alegó ante la Comisión que

"... la solicitud es inadmisibile porque ya ha habido una decisión del Comité de Ministros. Esto excluye la consideración ulterior de alegaciones que tengan el mismo origen que las que ya fueron materia de dicha decisión, y sean sustancialmente análogas a ellas." (Actas Literales, Primer día, pág. 57)

Después de referirse a los elementos principales de la decisión del Comité de Ministros, el Gobierno de Turquía dijo:

"... la esencia del asunto es que, o bien la decisión del Comité de Ministros es determinante para este punto, o bien no lo es. Pero, sea cual sea la forma en que se le mire, el asunto está actualmente fuera de la jurisdicción de la Comisión. En la medida en que la decisión resulte determinante para el asunto, éste está arreglado, y por dicha razón fuera de la jurisdicción de la Comisión. En la medida en que la decisión no resulte determinante para el asunto, el Comité de Ministros sigue conociendo de él, y por dicha razón el asunto está fuera de la jurisdicción de la Comisión." (Actas Literales, Primer día, pág. 60)

114. La Comisión se ocupó brevemente del punto diciendo, primero, que la decisión del Comité de Ministros "no indica ninguna posición adoptada por el Comité de Ministros en relación con la presente solicitud" (párr. 51). A continuación la Comisión se refirió a su propia decisión sobre la admisibilidad en el primer caso griego para fundamentar la proposición de que ella está "'limitada a una consideración del fondo del expediente que tiene ante sí y por lo tanto actúa con completa independencia' respecto de cualquier otro órgano" (párr. 52).

115. En cuanto al primer argumento de la Comisión, desde luego es cierto como descripción de hechos. Pero la descripción de ese hecho no resuelve la cuestión de si, cuando el Comité de Ministros ha actuado como lo ha hecho en relación con las primeras solicitudes, que en sustancia son tan análogas a la presente, es correcto que la Comisión considere la presente solicitud.

116. Por lo tanto, la cuestión radica en determinar si la manera en que el segundo argumento - y único argumento adicional - de la Comisión es suficiente para resolver la cuestión. A juicio del Gobierno de Turquía, claramente no lo es. La Comisión se arroga, no una independencia, sino un aislamiento que distorsiona completamente su papel en los procedimientos de aplicación previstos por la Convención. En primer lugar, la referencia al Primer caso griego es bastante impertinente. En dicho caso, la cuestión se refería al papel de la Asamblea Consultiva - respecto del cual la Comisión dijo correctamente entonces "que la Asamblea Consultiva no tiene competencia para conocer de las solicitudes en que se aleguen violaciones de la Convención" (Collection of Decisions, vol. 25, pág. 114). En el presente

caso, en cambio, la cuestión se refiere al papel del Comité de Ministros - un asunto totalmente diferente. A diferencia de la Asamblea Consultiva, a la que no se asigna función alguna en los procedimientos de aplicación de la Convención, el Comité de Ministros tiene una función específica. Los artículos 30 y 31 estipulan expresamente que el Comité de Ministros es el receptor de los informes de la Comisión mencionada en dichos artículos. Con arreglo al artículo 32, el Comité de Ministros debe decidir en determinadas circunstancias si ha habido una violación de la Convención. Cualquier comparación de la posición del Comité de Ministros con la posición de la Asamblea Consultiva en lo tocante a los procedimientos de aplicación de la Convención se basa en un grave error de interpretación. La Comisión no tiene derecho a pretender que su "independencia" la libera de la necesidad de dar el peso adecuado a la consideración de un asunto por el Comité de Ministros, como tampoco tendría derecho a pretender que la decisión de un asunto por la Corte Europea de Derechos Humanos no tendría importancia para la consideración de un asunto análogo o conexo por parte de la Comisión.

117. A este respecto, hay otro punto interesante que mencionar, que coloca en una perspectiva inquietante al enfoque adoptado por la Comisión en el presente caso, en particular en relación con el argumento relativo a la "pertinencia" para del caso de la decisión adoptada en 1977 por los Delegados de los Ministros".

Antes de pasar a este punto, debe recordarse que la decisión de 1977 se integró posteriormente en la resolución DH (79) 1, también adoptada por los Delegados de los Ministros.

Ahora bien ¿qué ha hecho la Comisión en relación con la pertinencia de esas decisiones adoptadas por el Comité de Ministros para el presente caso?

En respuesta al argumento de Turquía en que se alegaba dicha pertinencia, la Comisión expresó en la decisión de 1978 su completa independencia respecto de cualquier otro órgano, y por lo tanto respecto del Comité de Ministros.

Pero cuando examinamos el presente informe de la Comisión, descubrimos que la Comisión tiene ahora una actitud totalmente opuesta frente a sus anteriores pronunciamientos, pero esta vez para justificar la aceptación de un argumento hecho por la administración grecochipriota. Se hace referencia aquí al párrafo 62 del informe de 1983, en el cual la Comisión tomó nota específicamente de los términos de la resolución DH (79) 1 del Comité de Ministros.

Esta "dualidad de criterios" en el enfoque de la Comisión pone gravemente en tela de juicio su razonamiento jurídico en este caso en particular.

VI. En cuanto a si la petición es abusiva

118. El rechazo por la Comisión de la alegación del Gobierno de Turquía de que la petición es abusiva merece un breve comentario. La conclusión de la Comisión sobre este punto sólo puede ser válida si se aceptan todas sus conclusiones anteriores. Pero, una vez demostrado que el rechazo por la

Comisión de las demás objeciones a la admisibilidad planteadas por el Gobierno de Turquía es erróneo, la cuestión del abuso vuelve a ser sumamente pertinente. Esencialmente, el abuso del proceso de la Convención se funda en los puntos siguientes:

- i) La formulación de alegaciones que no son pormenorizadas;
- ii) El suministro en los casos en que se intenta dar pormenores, exclusivamente de pormenores vagos y no específicos;
- iii) La duplicación de procedimientos que entraña la presente solicitud y la imposibilidad de que el recurrente obtenga de los procedimientos de la Convención nada más que lo que ya está comprendido en la decisión del Consejo de Ministros de octubre de 1977;
- iv) El papel de la solicitud como parte de un cuadro de propaganda política dirigida contra Turquía.

119. Para concluir el presente capítulo sobre la decisión relativa a la admisibilidad, por razones que no son sostenibles, la Comisión ha distorsionado o pasado por alto totalmente alegaciones válidas formuladas por Turquía, o las ha desestimado sin un razonamiento jurídico convincente.

IV. OBSERVACIONES JURIDICAS SOBRE LA OPINION EXPRESADA POR LA COMISION EN SU INFORME

120. El Informe de la Comisión sobre el fondo del asunto es sorprendente por dos razones: i) en razón de la identidad de las cuestiones examinadas con las que surgen de las solicitudes primera y segunda (Nos. 6780/74 y 6950/75) de la administración grecochipriota y ii) por el tratamiento sorprendentemente superficial, y por lo tanto totalmente inconvincente, dado a la prueba por la Comisión.

121. Antes de pasar al fondo de las alegaciones concretas, tales como las consideró la Comisión, parece adecuado hacer un breve comentario sobre dos de las cuestiones examinadas en la parte I del informe bajo el subtítulo de "Generalidades", a saber: i) la negativa de Turquía a participar en los procedimientos (secciones 48 a 53 del informe) y ii) la cuestión de la identidad esencial de la tercera solicitud con las dos primeras solicitudes.

122. En cuanto a la primera cuestión, la Comisión simplemente cita su opinión expresada en el informe provisional de 12 de julio de 1980. En el último párrafo de esa cita, la Comisión culpó a Turquía por no haber participado en los procedimientos ante la Comisión en cuanto al fondo debido a que no reconocía que el recurrente tuviese derecho a presentar una acción contra Turquía (véase supra, secciones 18 a 50), mientras que por otro lado había aceptado participar en los procedimientos ante el Consejo de Ministros sobre las solicitudes Nos. 6780/74 y 6950/75. La Comisión creyó detectar aquí una incongruencia en la posición de Turquía, porque agregó: "Esos procedimientos, igual que los actuales, estaban regidos por la Convención".

El Gobierno de Turquía está sorprendido de verse frente a una declaración como ésta, que evidentemente no encuentra apoyo alguno en la situación jurídica que rige a la Comisión y al Comité de Ministros (artículo 32) respectivamente.

Como se recordó *supra*, en las secciones 21 iv) y 31, los procedimientos ante la Comisión en el contexto del artículo 28 son totalmente diferentes de los principios que rigen al Comité de Ministros en su procedimiento con arreglo al artículo 32. Mientras que el procedimiento con arreglo al artículo 28 de la Convención es contradictorio por naturaleza, y por lo tanto entraña un debate en el que una parte se enfrenta a la otra, o eventualmente contactos entre las partes en procura de un arreglo, en el contexto del artículo 32 no hay nada comparable.

En particular, el artículo 32 no contempla procedimientos contradictorios ("procédure contentieuse") ante el Comité de Ministros que, si bien tiene como uno de sus cometidos una potestad decisoria especial, sigue siendo un órgano político en el cual todos los miembros tienen igual condición. La Comisión debería haber conocido este importante punto de hecho y de derecho. Afirmar simplemente que ambos procedimientos "estaban regidos por la Convención" no es en modo alguno un argumento válido. Únicamente demuestra la manera superficial en que la Comisión elaboró su informe.

123. En lo tocante a la responsabilidad de Turquía, con arreglo a la Convención, por "actos u omisiones en el ejercicio de jurisdicción" en Chipre septentrional, la Comisión ya había rechazado una propuesta hecha por Turquía en la etapa de admisibilidad de que los hechos se determinaran mediante una visita a Chipre septentrional por invitación del Presidente del Estado Federado Turco de Chipre. Más bien sorprendentemente, la Comisión no sólo no aceptó la invitación; nunca se refirió siquiera a ella, ni intentó explicar las consideraciones que le llevaron a rechazar la invitación, que era el mejor medio posible de determinar la exactitud de las afirmaciones de Turquía.

La renuencia de la Comisión a investigar los hechos relacionados con el ejercicio de autoridad y control en Chipre septentrional es aún más notoria en el informe de 1983. En su decisión de 1978, la Comisión dijo que su conclusión de que "la jurisdicción de Turquía en el norte de la República de Chipre ... no puede excluirse en razón de que se alegue que la jurisdicción en dicha zona es ejercida por el 'Estado Federado Turco de Chipre'" no prejuzgaba de "la imputabilidad a Turquía de cualquier violación determinada de la convención que se estableciera mediante un examen del fondo de la solicitud" 8/. Sin embargo, al examinar la consideración de la imputabilidad a Turquía de los actos de la administración del Estado Federado Turco de Chipre en el informe de 1983, sólo se encuentra una repetición del pasaje de la decisión de 1978, seguida por esta franca declaración:

"La Comisión no estima necesario agregar nada a sus observaciones anteriores respecto de la imputabilidad a Turquía de cualquier violación determinada de la Convención por sus propias fuerzas armadas que pueda

establecerse en las partes II y III del presente informe. En cuanto a las violaciones de la Convención por actos de la administración turcochipriota, la Comisión considera que, según afirma el Gobierno recurrente, la existencia de cierta forma de administración civil en Chipre septentrional no excluye la responsabilidad de Turquía, habida cuenta del grado de control que Turquía tiene en Chipre septentrional. En particular, la Comisión está convencida de que no es posible decidir cambios fundamentales en las condiciones de Chipre septentrional sin la aprobación expresa o tácita de las autoridades turcas." 9/

Más adelante, la Comisión atribuyó responsabilidad a Turquía por una serie de actos, sin considerar en modo alguno si habían sido realmente ejecutados por las fuerzas turcas, por órganos del Estado Federado Turco de Chipre o por cualquier otra parte 10/.

En este caso, lo mismo que en su decisión de 1978, la Comisión no hizo intento alguno por investigar la situación en Chipre septentrional. Parece haber supuesto que las fuerzas turcas ejercían un control completo y que el Estado Federado Turco de Chipre funcionaba únicamente en la medida en que dichas fuerzas lo desearan o permitieran. Se hizo caso omiso de la detallada exposición hecha por Turquía en 1978 acerca de la Constitución y el Gobierno del Estado Federado Turco de Chipre, como se había hecho en 1978.

124. Con respecto a la cuestión de la identidad esencial entre la tercera solicitud y las dos primeras solicitudes, la Comisión empleó el mismo enfoque sumario que respecto de la cuestión anterior. Así, en la sección 58 del informe, la Comisión reconoció que la cuestión de las personas desaparecidas en la tercera solicitud es esencialmente la misma que en las dos solicitudes anteriores. Sin embargo, la Comisión reconsideró esta cuestión a la luz de la que llamó "nueva información pertinente indicada en la presente solicitud".

En cuanto a las denuncias restantes, la Comisión, después de haber señalado que dichas denuncias "se refieren sustancialmente a una situación en Chipre que ya ha sido objeto de informe de la Comisión en las dos solicitudes anteriores" (sección 59), decidió de todos modos que la parte recurrente tenía un interés jurídico en una nueva determinación de las denuncias restantes.

Antes de examinar esta opinión, es adecuado señalar a la atención del Comité de Ministros la forma sorprendente en que la Comisión decidió evaluar la resolución DH (79) 1, por la cual el Comité de Ministros había puesto punto final a las alegaciones hechas en las dos solicitudes anteriores, alegaciones que son esencialmente las mismas que las que se formulan en la presente tercera solicitud.

9/ Informe de 1983, párr. 64.

10/ Véase el informe de 1983, seccs. 135 y 136, 150 a 155 y 158.

Mientras que, en su decisión sobre la admisibilidad, la Comisión argumentó que no debía tomar en consideración la decisión de 21 de octubre de 1977 (que precedió a la resolución X (79) 1), en razón de que dicha decisión "no había sido comunicada a la Comisión" (sección 51 de la decisión de 10 de julio de 1978), la Comisión ahora sólo "toma nota" de los términos de la resolución DH (79) 1 (sección 62 del informe), sin analizar en modo alguno su incidencia en la tercera solicitud. En otras palabras, la Comisión simplemente hizo caso omiso de lo que el Comité de Ministros había decidido "poniendo fin al examen del caso de Chipre contra Turquía".

125. Volviendo al argumento de la Comisión respecto de la "nueva información" que se le ha proporcionado en cuanto a la denuncia sobre las personas desaparecidas, tal vez el Comité de Ministros desee examinar la índole de esta "nueva información", así como su valor probatorio, que, a juicio del Gobierno de Turquía, es totalmente inexistente.

126. La "nueva información" es, aparentemente, el testimonio recibido sobre los casos de cinco personas desaparecidas. En dos de esos cinco casos, la propia Comisión encontró que no eran convincentes las pruebas ofrecidas por la administración grecochipriota mediante el testimonio de llamados "testigos oculares" (véanse las secciones 96 a 110 del informe). En cuanto a los casos de las otras tres personas presuntamente desaparecidas - Panayiotis Christoforu (véanse las secciones 100 a 102 del informe), Andreas Gemano (véanse las secciones 103 a 105 del informe) y Costakis Georghiou (véanse las secciones 106 a 108 del informe) - la Comisión fundó sus conclusiones en el testimonio no corroborado de unos pocos testigos presentados por la administración grecochipriota.

El tratamiento de la prueba en todos estos casos es sorprendentemente débil y superficial. Si un tribunal interno hubiese actuado de esa forma, la Comisión, en caso de que se le hubiera pedido que examinara esa acción según los criterios de un "juicio justo", muy probablemente habría determinado que dicho testimonio no se ajustaba a las normas del artículo 6 de la Convención.

Nada podría ilustrar mejor esta observación que una cita de las partes pertinentes del informe de la Comisión, en las que la Comisión a la ligera dio por subsanadas evidentes contradicciones entre las declaraciones de los testigos, por ejemplo, en un caso, suponiendo que la persona interesada "no se afeitó durante cierto tiempo después del 14 de agosto de 1974".

En otras palabras, la Comisión (sección 102) consideró probado por las declaraciones concordantes (sic!) de dos testigos, que una de las personas desaparecidas estaba detenida por las autoridades turcas después del 14 de agosto de 1974. Sin embargo, en el párrafo anterior del informe, la Comisión admitió que el testimonio de los dos testigos no era plenamente concordante en la descripción de la persona supuestamente detenida por las autoridades turcas, pero dejó de lado esa falta de concordancia en la siguiente oración:

"Esto (diferencia en la descripción de la identidad de la persona desaparecida) puede explicarse, a juicio de la Comisión, por el hecho de que esta persona desaparecida no se afeitó durante cierto tiempo después del 14 de agosto de 1974."

El Gobierno de Turquía prefiere no hacer comentario alguno sobre esta declaración, que es por sí sola elocuente en cuanto a las normas asombrosamente superficiales que la Comisión aplicó para la admisión de la prueba.

Además, ¿qué otras pruebas intentó obtener la Comisión? Evidentemente, ninguna. ¿Por qué entonces aceptó la Comisión como verdadera la declaración de algunos de los testigos nombrados por la administración grecochipriota, mientras que el testimonio de otro testigo (sección 105 del informe) fue desestimado como "pensamientos ilusorios"? ¿Qué criterios se aplicaron para hacer una diferenciación tan importante en la evaluación de las declaraciones de testigos? ¿Los demás testigos no habrán estado guiados también por "pensamientos ilusorios"?

Y cabe preguntarse también por qué la Comisión no ha tratado de verificar los resultados de sus "comprobaciones" con la información obtenida por la Cruz Roja Internacional, con mayor razón aún habida cuenta de que la Comisión conocía la existencia de un comité tripartito establecido en relación con la Cruz Roja para examinar el problema de las personas desaparecidas de ambos lados.

Si la Comisión hubiese consultado la documentación de la Cruz Roja, habría encontrado que, por ejemplo, la primera de las tres personas desaparecidas nombradas - Panayidis Christoforous - fue entregada a la Cruz Roja con el nombre de Panagiotis Christou (No. 545 en la lista de prisioneros de guerra, Grupo 5).

126 a. Y sin embargo, a pesar de esas comprobaciones sumamente frágiles respecto de tres personas supuestamente desaparecidas, la Comisión llegó a la conclusión generalizada (sección 115 del informe), "sobre la base de su investigación de cinco casos y de otros materiales presentados", de "que las personas restantes, una cantidad indefinida han estado detenidas por las autoridades turcas en 1974 después de la cesación de actividades" - y consiguientemente imputó a Turquía una violación del artículo 5 de la Convención.

127. En cuanto a la prueba de otras afirmaciones que la Comisión declaró admisibles, el enfoque es igualmente débil y preocupante.

128. La cuestión de las "personas desplazadas y la separación de familias" fue examinada en las secciones 132 a 136 del informe de la Comisión.

La Comisión, después de recordar que ya había tenido ante sí la misma cuestión sobre la base de las solicitudes anteriores, con la conclusión de que Turquía había violado el artículo 8 de la Convención, en el presente caso agregó simplemente que la continuación de la situación era un factor agravante que justificaba que se declarara nuevamente una violación del artículo 8.

¿Qué es lo nuevo de esta evaluación en comparación con el informe sobre las solicitudes anteriores? Sólo la "continuación" de la presunta violación.

Si este elemento de la "continuación" es realmente suficiente para fabricar una nueva solicitud, la Comisión entrega a la administración grecochipriota casi un permiso gratuito para que presente una vez tras otra

denuncias infundadas, agregando solamente el elemento de continuidad a la anterior acusación falsa, para permitir que la Comisión declare que esta denuncia no es esencialmente la misma que la correspondiente a la solicitud anterior.

Con todos los respetos, el Gobierno de Turquía estima que la Comisión, al razonar como lo hizo, no ha actuado con arreglo a los términos y al espíritu de la Convención.

129. Tal vez éste sea el lugar más apropiado para recordar en términos inequívocos que Turquía no tiene nada que ver con la cuestión de las personas desaparecidas en Chipre y no es parte en la cuestión. Esta cuestión humanitaria, que lamentablemente ha sido objeto de constante explotación por la parte grecochipriota, es una cuestión entre los chipriotas turcos y los chipriotas griegos. En el momento actual, existe un órgano específico, a saber, el Comité sobre Personas Desaparecidas (CPD) que se ocupa de esta cuestión. El CPD, que fue establecido y tuvo su primera reunión en junio de 1981, es el único órgano competente para entender en la cuestión de las personas desaparecidas en Chipre. El CPD tiene tres miembros, uno perteneciente al Comité Internacional de la Cruz Roja y designado por el Secretario General de las Naciones Unidas, y uno de cada una de las partes de Chipre. El CPD tiene su propio mandato, escrito y aprobado oficialmente por ambas partes. El CPD se ocupa actualmente de los asuntos de su competencia tratando de resolver los casos de las personas desaparecidas de ambos lados.

El CPD es el único órgano que ha sido aceptado por ambas partes para entender en la cuestión de las personas desaparecidas. Por lo tanto, resulta claro que no puede haber ningún otro órgano que se ocupe de esta cuestión, pues el intento de hacerlo constituiría una injerencia en la labor y el funcionamiento del CPD.

Turquía no es miembro del CPD y no participa en la labor del CPD. Los intentos grecochipriotas de involucrar a Turquía en esta cuestión constituyen un caso claro de abuso político y demuestran que, aun cuando aceptan la competencia de la jurisdicción del CPD, los chipriotas griegos tratan de llevar la cuestión a otros foros, tales como la Comisión. El CPD está funcionando, y, si se le da una oportunidad razonable, debería poder resolver este doloroso problema en un plazo razonable. La cuestión de las personas desaparecidas es un asunto comprendido en la jurisdicción exclusiva de ambas partes de Chipre. Si hay alguna averiguación respecto de la cuestión de las personas desaparecidas o acerca de casos concretos de personas desaparecidas, debe dirigirse a las autoridades chipriotas turcas o chipriotas griegas, en el contexto de los procedimientos del CPD.

130. Volviendo al informe de la Comisión, debe señalarse que el tercer grupo de denuncias (privación de derechos de propiedad) ha sido tratado por la Comisión en la misma forma superficial que los otros dos grupos de denuncias. A lo largo del capítulo pertinente del informe, la Comisión, como lo ha hecho respecto de las dos denuncias mencionadas anteriormente, ha repetido fundamentalmente lo dicho en el informe sobre las dos solicitudes anteriores.

La única "cuestión nueva" en este tercer apartado fue una referencia a una ley del Estado Federado Turco de Chipre que regula la distribución de la tierra en Chipre septentrional.

Y sobre la presunta discriminación en perjuicio de los chipriotas griegos, la Comisión dijo (en la sección 162) que no tenía nada que agregar a las conclusiones a que había llegado en el informe anterior. ¿No es ésta otra confirmación de la naturaleza idéntica de la tercera solicitud en comparación con las dos anteriores?

131. Para todas estas suposiciones superficiales y vagas, la Comisión necesitó seis años y un mes para llegar a sus conclusiones. El caso fue calificado por el régimen grecochipriota como referente a la "violación masiva de derechos humanos más grave desde el fin de la segunda guerra mundial". Sin embargo, la misma administración grecochipriota no se abstuvo de recurrir a tácticas dilatorias, para sus propios fines políticos, durante los procedimientos del caso.

132. El Gobierno de Turquía no sólo rechaza completamente las conclusiones a que ha llegado la Comisión; expresa además su gran preocupación por el enfoque que la Comisión ha utilizado respecto de las infundadas denuncias y la propaganda política de la administración grecochipriota.

133. Por todas las razones indicadas, Turquía no puede aceptar como imparcial el informe de la Comisión, que a este respecto no es distinto de la decisión adoptada en 1978 en cuanto a la admisibilidad de la solicitud de la administración grecochipriota.

V. CONCLUSION

134. En los capítulos anteriores, el Gobierno de Turquía ha colocado al caso que se está considerando en la perspectiva adecuada.

135. La tercera solicitud no es más que otro intento de la administración grecochipriota de lograr fines puramente políticos fuera del marco de los esfuerzos realizados por el Secretario General de las Naciones Unidas, actuando dentro de la misión de buenos oficios que le encomendó el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para lograr que las conversaciones entre ambas partes directamente interesadas llevaran a una solución fructífera. Esas conversaciones son el único camino hacia una solución pacífica y duradera del problema de Chipre. La importancia de las conversaciones intercomunitarias fue destacada también por el Comité de Ministros en su resolución DH (79) 1, con la cual puso fin a las dos primeras solicitudes del régimen grecochipriota.

136. Además de la naturaleza puramente política de la tercera solicitud, el Comité de Ministros debería tener presente las extraordinarias deficiencias jurídicas tanto de la decisión de 1978, por la cual la Comisión declaró admisible la tercera solicitud, como de la opinión de 1983 contenida en el informe de la Comisión. El Gobierno de Turquía, en los capítulos III y IV del presente memorándum, ha formulado comentarios detallados sobre las partes críticas de ambos documentos emitidos por la Comisión.